

# INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

## § 1. EL LUGAR DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL EN EL DERECHO DE OBLIGACIONES

**1. La responsabilidad extracontractual como relación obligatoria.** a) Desde un punto de vista lógico, la responsabilidad civil es un juicio normativo que consiste en *imputar a una persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona*.<sup>1</sup>

b) A diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal e infraccional, donde se contemplan ilícitos de mero peligro y se sancionan conductas tentadas y frustradas, *sin daño no hay responsabilidad civil*. Por eso, el daño es condición esencial de la responsabilidad patrimonial.<sup>2</sup>

Pero el daño es también el *objeto* de la acción, porque la acción indemnizatoria persigue la reparación en dinero de los perjuicios sufridos (*infra* N° 141). Las otras acciones, diferentes de la acción indemnizatoria, que se conceden a la víctima, como la de restitución en naturaleza al estado anterior al hecho del demandado, también están dirigidas a remover o poner término al daño (*infra* § 57).

c) El principio que inspira el orden de la responsabilidad patrimonial es *alterum non laedere*.<sup>3</sup> Sin embargo, como ocurre con los otros componentes de la idea de justicia en el texto clásico de Ulpiano, el principio de que no debemos dañar al prójimo es excesivamente general para definir por sí solo las condiciones de la responsabilidad.

En nuestra vida de relación estamos expuestos a incontables riesgos, en cuya ocurrencia intervienen terceros: contraemos por contagio una en-

<sup>1</sup> Kelsen 1934 83, Kelsen 1960 125.

<sup>2</sup> Excepcionalmente, la acción que surge de un ilícito civil puede estar dirigida a la restitución de un *beneficio* y no a la reparación de un daño, pero en tal caso difícilmente puede aun hablarse de *responsabilidad* (*infra* § 60).

<sup>3</sup> Digesto 1.1.10: “Es justicia la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. (1) Estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no dañar al prójimo, dar a cada uno lo suyo. (2) La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto”.



fermedad; fracasamos en la postulación a un trabajo o a una beca, porque otro tenía mejores antecedentes; sufrimos un accidente en un establecimiento de comercio, porque las baldosas han sido recién enceradas; perdemos dinero, porque los administradores de una sociedad hacen malos negocios. El derecho de la responsabilidad civil establece los criterios y requisitos para que esos daños puedan ser normativamente atribuidos al tercero que los ha provocado, de modo que se justifique otorgar a la víctima una acción reparatoria.

d) Según un principio reiterado en el Código Civil (artículos 1437, 2284, 2314 y 2329),<sup>4</sup> la atribución de responsabilidad civil supone que el demandado haya incurrido en culpa, sea en la forma de dolo (delito civil) o de negligencia (cuasidelito civil). Pero la ley también establece, respecto de ciertos riesgos, hipótesis de responsabilidad basadas en la mera causalidad entre el hecho del demandado y el daño (responsabilidad estricta u objetiva). En uno y otro caso, establecidos los hechos respectivos, la ley da por constituida una *relación obligatoria* entre quien provocó el daño y quien lo sufrió.<sup>5</sup>

e) La obligación del civilmente responsable es usualmente indemnizatoria, esto es, tiene por objeto dar una suma de dinero que repare o compense los perjuicios sufridos por el acreedor; pero también puede tener por objeto que el deudor haga lo necesario para restituir al acreedor en naturaleza a la situación anterior a los perjuicios causados o no haga hacia adelante aquello que ha provocado el daño.

Así, la responsabilidad civil puede dar lugar a distintos tipos de *acciones*. La más generalizada es la que persigue la *indemnización* en dinero por los perjuicios sufridos. Pero también en sede extracontractual se reconoce una acción para que se *restituya* materialmente a la víctima a la situación anterior al daño; y una para *hacer cesar* el daño que está actualmente ocurriendo.

Este libro está construido sobre la base de que la acción indemnizatoria es la más general de las acciones de responsabilidad. Sin perjuicio de las referencias que se harán al tratar de la acción indemnizatoria, las acciones restitutorias y de cesación del daño serán analizadas en particular en el capítulo sobre las acciones a que da lugar el daño normativamente atribuible al demandado (*Capítulo XI*).

<sup>4</sup> En lo sucesivo, a menos que se exprese o que del contexto resulte que se hace referencia a otro cuerpo normativo, cada vez que en este texto se cite un artículo, debe entenderse que se hace referencia al Código Civil chileno.

<sup>5</sup> Destacando esa relación obligatoria, se ha resuelto que “la responsabilidad es un concepto jurídico que en su acepción civil implica la obligación en que se encuentra una persona de reparar y satisfacer el perjuicio o daño sufrido por otra” (Corte de Concepción, 10.8.2000, confirmado por la CS [cas. forma y fondo], 24.1.2002, GJ 259, 38); también se ha fallado que “la responsabilidad es la obligación en que se coloca una persona en orden a reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado” (Corte de Santiago, 10.7.2002, RDJ, t. XCIX, sec. 2ª, 83).

**2. Preguntas que plantea la responsabilidad por daños.** a) Algunos ejemplos cotidianos pueden ayudar a descubrir los tipos de preguntas que plantea a abogados y jueces el juicio de responsabilidad civil:

1) Un avión se precipita a tierra a consecuencias de un desperfecto técnico, causando la muerte de su tripulación y de sus pasajeros.

2) Un niño, que juega con una varilla metálica mientras camina sobre un puente, muere electrocutado al alcanzar uno de los cables eléctricos que alimentan el ferrocarril.

3) Una caldera industrial colapsa y ocasiona la muerte al trabajador que la manipulaba.

4) Una botella gaseosa estalla provocando la pérdida de un ojo del consumidor que se disponía a abrirla.

5) Un automóvil atropella a un peatón que cruza la vía a pesar de que el semáforo le indicaba detenerse.

6) Un hombre mayor sufre un colapso al presenciar un atropello mientras camina por la calle.

7) Un empresario pierde una importante oportunidad de negocios al quedar atrapado durante dos horas en un taco resultante del accidente causado por un tercero que conducía a exceso de velocidad.

8) Una anciana, a quien cuesta mucho conciliar el sueño, despierta cada vez que en el departamento superior llega tarde un joven bullicioso.

Casos tan diferentes entre sí plantean una pregunta común: aceptado que un tercero ha intervenido causalmente en la ocurrencia de un daño, ¿procede que la víctima sea indemnizada por ese tercero?

La respuesta a esta cuestión esencial está determinada por las condiciones que el derecho establece para que haya lugar a la responsabilidad civil: ¿basta que el tercero haya intervenido de cualquier modo en la ocurrencia del accidente, o es necesario, además, que su conducta sea reprochable? Este primer orden de preguntas define los principales *sistemas de atribución de responsabilidad*: el de responsabilidad estricta u objetiva, que (en su forma más simple) sólo exige una relación causal para que surja la obligación indemnizatoria, con la consecuencia de que quien desempeña una actividad asume todos los riesgos de accidentes que se derivan de realizarla; y el de responsabilidad por culpa, que exige, además, que el autor del daño haya actuado con negligencia o mala fe.

A su vez, la responsabilidad por *culpa* plantea la pregunta por los criterios para trazar la línea divisoria entre la diligencia y la negligencia. En el caso (2), ¿fue negligente la compañía ferroviaria al no tender una red protectora sobre los cables eléctricos, a efectos de impedir un accidente como el sufrido por el niño juguetero? O, al revés, ¿resulta excesivo exigir ese grado de prevención, porque son los padres quienes deben evitar que su hijo esté en situación de sufrir ese daño?

Cualquiera sea el sistema de responsabilidad, se ha visto que es necesario que la víctima haya sufrido un *daño*. Por cierto que los daños a que estamos expuestos por la acción de terceros son de las índoles más diversas: desde las recíprocas molestias de convivencia, en gran medida inevitables, como el caso 8), hasta la muerte del marido que mantiene a la familia,



como puede ser el caso 3). Surgen entonces preguntas como las siguientes: ¿qué daños se indemnizarán?; ¿por qué conceptos tiene la cónyuge del trabajador fallecido una pretensión indemnizatoria?; ¿puede ser reparado en dinero el sufrimiento de esa mujer o la pérdida de calidad de vida asociada a la pérdida del ojo por quien abría la gaseosa?; y si así fuere, ¿cómo se avalúa la pérdida de un ojo?

También es común a todos los sistemas de responsabilidad la pregunta por la conexión que debe haber entre el hecho del tercero y el daño. La doctrina ha llamado *causalidad* a este requisito de la responsabilidad, que se traduce en la exigencia de que exista alguna relación de razonable cercanía entre ambos factores. Así, por ejemplo, ¿puede atribuirse el daño en el caso 4) a la conducta del embotellador?; ¿debe extenderse la responsabilidad hasta efectos dañinos más bien extraordinarios, como ocurre en el caso 6)?; ¿sobre quién recae el riesgo en el caso 1), si no se puede determinar la causa precisa del defecto técnico que hizo colapsar al avión?

En los casos 1) y 4) existen contratos de transporte y compraventa, respectivamente: ¿están obligadas las víctimas a fundar su acción en el contrato o pueden escoger entre ésta y la acción de responsabilidad extracontractual? Y en los casos 3) y 4): ¿tiene influencia la condición particular de la víctima (trabajador y consumidor, respectivamente) a efectos de establecer la responsabilidad del causante del daño?

b) Las preguntas anteriores muestran cómo el derecho de la responsabilidad civil ha debido evolucionar hacia un complejo conjunto de principios y reglas, que a veces apuntan en direcciones diferentes. En circunstancias que el Código Civil sólo plantea criterios muy generales de responsabilidad, es inevitable que los aspectos más precisos de este ordenamiento hayan sido desarrollados en gran medida por la doctrina y la jurisprudencia.

**3. Responsabilidad contractual y extracontractual.** a) La distinción de Gayo entre el contrato y el ilícito como fuentes de las obligaciones ha constituido por casi dos mil años la gran división del derecho de obligaciones.<sup>6</sup> Sólo con el correr del tiempo la doctrina ha encontrado en el enriquecimiento sin causa, que también tiene origen romano, un tipo de obligaciones de generalidad comparable a esa gran división (*infra* N° 4).<sup>7</sup>

Los efectos del contrato incluyen la acción para exigir su cumplimiento y la acción indemnizatoria que se sigue de su incumplimiento. En nuestro Código Civil ambas materias están tratadas bajo el epígrafe ‘Del efecto

<sup>6</sup> Inst. Gayo 3.88.

<sup>7</sup> En este libro se asume que las categorías del cuasidelito y del cuasicontrato carecen de sustento normativo material. En efecto, en la medida que la culpa es un requisito genérico de responsabilidad, que comprende indistintamente el dolo y la negligencia, carece de sentido práctico distinguir entre ‘delitos’ y ‘cuasidelitos’ civiles. La categoría del cuasicontrato, por su parte, es puramente residual y comprende diversas hipótesis de actos lícitos no convencionales que dan lugar a obligaciones restitutorias (*infra* N° 4).

de las obligaciones' (artículos 1545 y siguientes). En esta identificación de la responsabilidad civil con el incumplimiento contractual se muestra cómo el derecho de obligaciones, y de la responsabilidad civil en particular, se desarrolló a partir de la doctrina del contrato.<sup>8</sup>

En contraste, la responsabilidad extracontractual está desarrollada en un breve título, al final de las fuentes de las obligaciones (artículos 2314 y siguientes); y, siguiendo el modelo del Código francés, está construida bajo una cláusula general de responsabilidad por culpa o dolo y no contiene reglas especiales acerca de los efectos de la responsabilidad.

b) Tanto el incumplimiento del contrato como el ilícito no contractual son *fuentes de responsabilidad civil*: en ambos casos el deudor contrae la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el demandante. En circunstancias que muchas de las preguntas son análogas en ambas sedes y que las normas legales sobre responsabilidad contractual sirven de referencia para construir los efectos de la responsabilidad extracontractual, parte de la doctrina (especialmente francesa) ha sostenido que la responsabilidad civil debe ser tratada bajo un estatuto único, que incorpore las hipótesis de responsabilidad contractual y extracontractual.<sup>9</sup> A pesar de que buena parte de las diferencias que tradicionalmente han sido planteadas entre ambos tipos de responsabilidad han sido superadas por la evolución doctrinaria y jurisprudencial (*infra* § 64), la experiencia muestra la conveniencia de cuidar la especificidad del contrato como instituto básico en una economía de intercambios, lo que lleva a mirar con recelo la construcción de un sistema unitario de responsabilidad.

c) Conviene resaltar que existe una *diferencia de grado* entre la obligación indemnizatoria que surge del contrato y del ilícito extracontractual. En efecto, mientras en el contrato existe una obligación principal, cuyo incumplimiento da lugar a una obligación indemnizatoria derivada, en sede extracontractual la relación obligatoria entre las partes recién nace del hecho que causa daño y que da lugar a la responsabilidad.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Esa es la estructura del tratado sobre las obligaciones de Pothier 1761 (1ª parte, Capítulo II) y del Código Civil francés (Título III, Capítulo III). La estructura ya se muestra en la sistematización tardía del derecho romano (Inst. Just. 3.13 y siguientes); a pesar de que la pandectística alemana del siglo XIX, que dio forma al BGB, intentó construir una parte general del derecho de obligaciones, no pudo evitar que sus normas atiendan preferentemente a la relación contractual.

<sup>9</sup> El tratamiento conjunto de la responsabilidad contractual y extracontractual se ha generalizado en Francia luego del tratado de los hermanos Mazeaud (Mazeaud *et al.* 1963); con una aproximación semejante, Yzquierdo 1993 83. En nuestro sistema jurídico se acostumbra seguir el esquema de Pothier, que el Código chileno toma del francés, donde bajo el epígrafe 'De los efectos de las obligaciones' se tratan esencialmente preguntas de responsabilidad contractual, dejando para la responsabilidad extracontractual el tratamiento diferenciado de sus elementos particulares (con énfasis en las diferencias con la responsabilidad contractual).

<sup>10</sup> La distinción entre obligaciones principales y derivadas fue planteada por Pothier 1761 N° 183; sobre su reconocimiento en la tradición analítica inglesa, especialmente en



La obligación principal que nace de un contrato consiste en cumplir lo convenido, de modo que la obligación indemnizatoria surge sólo una vez que el deudor ha incumplido esa obligación contractual (de primer grado). La responsabilidad contractual es un remedio que el derecho confiere al acreedor para hacer frente al incumplimiento de lo pactado. Así se explica que en materia contractual la acción de responsabilidad completamente o sustituya a la acción que tiene por objeto el cumplimiento en naturaleza de la obligación principal. La obligación indemnizatoria (obligación de segundo grado) tiene precisamente por fundamento y medida el incumplimiento de la obligación principal (o de primer grado).

Esta diferencia no es puramente teórica. En efecto, en materia contractual lo determinante es el acuerdo de las partes, al que la ley atribuye efecto obligatorio (artículo 1545). Ese acuerdo contractual determina el alcance de las obligaciones y, subsecuentemente, la responsabilidad que se sigue del incumplimiento. Por el contrario, la responsabilidad extracontractual tiene por antecedente los deberes generales de cuidado que nos debemos recíprocamente en nuestra actividad susceptible de dañar a terceros. Por eso, la fuente de la responsabilidad contractual es la *convención*, mientras que en sede extracontractual lo determinante es el *derecho*, que pone límites y establece consecuencias patrimoniales al ejercicio negligente de nuestra libertad (según el antiguo principio de justicia que ordena no dañar a los demás).

d) La más fuerte crítica a la distinción entre el contrato y el ilícito extracontractual ataca el corazón de la doctrina del contrato como acuerdo de voluntades. Se asume que en el tráfico contractual contemporáneo es usual que los acuerdos sólo residan en los aspectos esenciales del negocio, de modo que sus efectos están en gran medida determinados por la ley y por los deberes que impone la buena fe. Es el caso, por ejemplo, de los contra-

---

John Austin, Birks en Birks 1997 23. En Chile se ha fallado que “las fuentes de donde emana la responsabilidad civil, son las mismas que el artículo 1437 del Código Civil señala como origen de las obligaciones, y entre ellas aparecen las que surgen a consecuencia de la violación de un vínculo de obligación preexistente y aquéllas constituidas por la comisión de un hecho ilícito, ajena a todo vínculo jurídico anterior, mediando dolo o imprudencia” (CS, 6.11.1972, RDJ, t. LXIX, sec. 4ª, 181). También se ha expresado que “la culpa contractual y extracontractual están regidas por leyes diversas, que tienen alcance y extensión distintas. La primera se produce por incumplimiento o retardo del deudor de una obligación que nace del contrato, del cuasicontrato o de la ley. Y la segunda no tiene ningún nexo entre una parte y otra; se genera por hechos de personas extrañas entre sí, que no se pueden prever mediante convenciones preexistentes” (CS, 3.7.1951, RDJ, t. XLVIII, sec. 1ª, 252). Asimismo, la Corte Suprema ha sostenido que “la responsabilidad contractual es la que emana de la existencia de un vínculo previo entre la parte que reclama la indemnización y aquélla a la cual se demanda, y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, pero en la primera de ellas necesariamente debe existir una vinculación entre las partes y, en la segunda tal nexo no se presenta” (CS, 2.10.2003, F. del M. 515, 2956); en el mismo sentido, CS, 11.5.2004, GJ 287, 247; y CS, 7.10.2004, GJ 292, 220.



tos que se convienen mediante un mero comportamiento social típico, como subir a un microbús o comprar en un supermercado; o que están sujetos a condiciones generales de contratación, propuestas por la parte que hace una oferta contractual general y estandarizada. A ello se agregó cíclicamente durante el siglo pasado una tendencia a la regulación administrativa del contrato.

El acento en estos aspectos no negociados del contrato llevó a una parte de la doctrina, especialmente en la década de 1970, a proponer la incorporación de la categoría del contrato bajo el estatuto (supuestamente más general) de la responsabilidad por daños. El argumento principal ha sido que el elemento convencional del contrato tiende a desaparecer; sea de hecho, a consecuencia de las prácticas contractuales (como ocurre en los contratos masivos sujetos a condiciones generales de contratación), sea en razón de regulaciones legales o administrativas que limitan la facultad negociadora de las partes (como ocurre con el contrato dirigido).<sup>11</sup>

La experiencia, sin embargo, ha mostrado la conveniencia de mantener separadas ambas fuentes de obligaciones. Por elemental que pueda ser el consentimiento en algunas formas contractuales, el contrato cumple una función y responde a una lógica interna diferente a la de la responsabilidad extracontractual, de modo que, especialmente al momento de determinar las condiciones de la responsabilidad, es relevante si se trata del incumplimiento de un deber contractual o si se trata de la inobservancia de un deber general de cuidado.<sup>12</sup>

e) Por medio de un contrato se pueden regular riesgos que de lo contrario quedarían sujetos a un estatuto de responsabilidad extracontractual. En tal sentido, existe una cierta *prioridad relativa del contrato* respecto de la responsabilidad extracontractual. Sería el caso de un industrial que produce ruidos molestos que celebra contratos con todos sus vecinos para que acepten las turbaciones durante ciertos períodos de tiempo a cambio de una retribución convenida; en ese caso, el contrato regiría materias que de no haber mediado acuerdo serían tratadas según las reglas de la responsabilidad extracontractual (*infra* N° 841).

<sup>11</sup> Véanse, especialmente, Atiyah 1979 y Gilmore 1974 *passim*. En Chile, se ha fallado que “la línea divisoria entre los deberes de cuidado emanados del contrato y aquellos que emanan del deber general de no causar culpablemente daños a terceros, es muy borrosa en ciertos ámbitos del quehacer humano” (Corte de Concepción, 10.8.2000, confirmado por la CS [cas. forma y fondo], 24.1.2002, GJ 259, 38).

<sup>12</sup> En verdad, el mayor efecto que ha tenido el movimiento crítico ha sido remecer algunos supuestos radicalmente voluntaristas sobre los cuales está construida la doctrina tradicional del contrato, haciéndose cargo de los tipos contractuales que se alejan del modelo clásico del contrato negociado; la doctrina del contrato ha devenido en menos ingenua respecto de sus supuestos y se ha mostrado suficientemente flexible para abrir paso al discernimiento de las diversas realidades contractuales; al respecto es admirable la temprana lucidez de Raiser 1958 y Raiser 1960. Un fino análisis del principio del consentimiento como constitutivo de la obligación contractual en las formas contractuales contemporáneas puede consultarse en Smith 2004 323.



De hecho, desde un punto de vista analítico se puede asumir que las reglas de responsabilidad extracontractual podrían ser radicalmente sustituidas por contratos entre los agentes de riesgo y las potenciales víctimas.<sup>13</sup> El único límite está dado por las buenas costumbres y el orden público; así serían ilícitos en razón de su objeto, por ejemplo, los pactos que importen la condonación anticipada del dolo o la disposición de derechos irrenunciables, como la vida o la salud (*infra* N° 81 y § 70).

Más allá del importante aporte analítico que significa mirar las reglas de responsabilidad desde la perspectiva teórica de un mercado en que se transen todos los intereses, la regulación convencional de los riesgos generales de accidentes es por completo excepcional. Los riesgos a los que diariamente nos vemos enfrentados son tan difusos, que la negociación de contratos entre los potenciales causantes de daños y sus víctimas resulta inviable por los costos de obtener la información relevante y por los demás costos de transacción para llegar a acuerdos individuales con innumerable personas. Así, por ejemplo, las líneas aéreas están impedidas de negociar contratos con todos aquellos que podrían verse afectados en tierra por un eventual accidente, y lo mismo ocurre con los fabricantes de bebidas gaseosas o de medicamentos con los consumidores finales. De este modo, la atribución de riesgos por medio de contratos sólo es posible en aquellos casos excepcionales en que el riesgo y las potenciales víctimas son perfectamente identificables *a priori* y, además, se justifica el costo de negociar los acuerdos (*infra* N° 870).<sup>14</sup>

f) En consecuencia, la diferencia específica de las reglas de responsabilidad extracontractual radica en que se aplican a situaciones en que no existe una relación obligatoria previa entre la víctima y el autor del daño. Sobre las relaciones entre la responsabilidad contractual y la extracontractual se volverá extensamente al final de este texto (*Capítulo XII*).

**4. Responsabilidad extracontractual, obligaciones restitutorias y otras obligaciones cuasicontractuales.** a) La categoría de las *obligaciones cuasicontractuales* tiene poco interés, porque carece de un sustento normativo común. Su carácter es puramente residual. El concepto ya había sido empleado en el derecho romano tardío, pero no como una fuente autónoma de obligaciones, sino con referencia a relaciones que producen efectos análogos al contrato.<sup>15</sup> Bajo ese concepto quedan comprendidas obligaciones de diversas fuentes, que sólo tienen en común no provenir ni de delito ni de contrato.

<sup>13</sup> Sobre la lógica económica de tales acuerdos, Coase 1960 83, Calabresi 1970 145.

<sup>14</sup> En haber mostrado la diferencia entre el esquema analítico que permite concebir las relaciones recíprocas sobre la base de un sistema de contratos y las restricciones impuestas por la realidad radica el mérito más importante de Coase 1960.

<sup>15</sup> Las Inst. Just. 3.37 hablan de los cuasicontratos como “obligaciones que no nacen, propiamente hablando, de un contrato, pero que, sin nacer tampoco de un delito, parece que nacen *como* de un contrato” (énfasis mío). Sobre este aspecto modal y no sustantivo del concepto de cuasicontrato en el derecho romano, Guzmán 1996 I 707.



Algunos cuasicontratos provenientes del derecho romano presentan alguna analogía contractual (la agencia de negocios con el mandato; la comunidad con la sociedad; el pago de lo no debido con el mutuo), pero no es el caso de las obligaciones que nacen de la tutela, del legado modal y, muy especialmente, de los diversos tipos de *condictio*, que anteceden al instituto moderno del enriquecimiento sin causa.<sup>16</sup> Con razón, en el derecho moderno se evita usar la categoría del cuasicontrato, pues no hay reglas comunes que se apliquen a todos los supuestos que comprende de manera residual.<sup>17</sup>

b) La decadencia del cuasicontrato contrasta con el interés adquirido por la institución del *enriquecimiento sin causa*, que ha devenido en una fuente general de obligaciones restitutorias. A diferencia de la responsabilidad patrimonial, que tiene por objeto esencial indemnizar los daños que se siguen de un ilícito civil, la acción de enriquecimiento sin causa se dirige a obtener la restitución de los beneficios que el deudor ha recibido sin derecho, como típicamente ocurre en el pago de lo no debido (artículo 2300).

El enriquecimiento sin causa ha llegado a ser una fuente general del derecho moderno de las obligaciones.<sup>18</sup> Su lógica interna responde nítidamente a un fundamento de justicia correctiva, porque mediante una restitución se corrige el injusto de que alguien haya obtenido sin justificación un beneficio a expensas del demandante.<sup>19</sup> Desde el punto de vista de la naturaleza de la acción, el enriquecimiento sin causa da lugar a una *obligación restitutoria*, porque su objeto es recuperar aquello que el demandado injustamente ha recibido.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Kaser 1971 I 592 y II 421, Zimmermann 1990 838.

<sup>17</sup> A ello se agrega que el cuasicontrato tampoco es comprensivo de todas las obligaciones que provienen de hechos lícitos y que se adquieren sin convención. Descartadas las hipótesis de responsabilidad estricta u objetiva, que son una forma de responsabilidad en cuanto a sus efectos, no quedan comprendidas, por ejemplo, las obligaciones restitutorias que siguen a la declaración de nulidad y a la resolución de un contrato, las obligaciones *propter rem* del usufructuario, ni las demás que consideraba el derecho romano tardío (obligaciones de los guardadores y del legatario modal).

<sup>18</sup> En verdad, en el derecho de obligaciones contemporáneo se tiende a distinguir tres fuentes principales (contrato, ilícito y enriquecimiento sin causa), a lo cual se agregan otras obligaciones de fuentes diversas, incluidas las propiamente legales (Birks en Birks 1997 19). El instituto del enriquecimiento sin causa aparece formulado con bastante generalidad ya por Pomponio (Digesto 50.17.206), pero su establecimiento como criterio general de clasificación de obligaciones parece provenir de Grocio (Zimmermann 1990 885).

<sup>19</sup> Weinrib en Birks 1997 44.

<sup>20</sup> El ámbito de las obligaciones restitutorias es muy extenso en derecho civil. Además de las obligaciones que provienen del pago de lo no debido y de la hipótesis general de enriquecimiento sin causa (*condictio sine causa* del derecho romano), surgen obligaciones restitutorias de la nulidad (prestaciones mutuas), de la condición resolutoria, de las recompensas en la sociedad conyugal, de la obligación de compensar gananciales en el régimen de participación y de los cuasicontratos de agencia oficiosa (artículo 2290) y de comunidad (artículos 2307 y 2308). En el *common law*, el derecho de *restitutions*, entendido como el correctivo legal al enriquecimiento injusto, ocupa un lugar al lado de los *contracts* y *torts* en la exposición del derecho de obligaciones (Birks 1985 9).

c) En materia de responsabilidad extracontractual también suelen surgir obligaciones restitutorias, que complementan o sustituyen a las obligaciones propiamente indemnizatorias. En la medida que ello resulta posible, la víctima de un daño tiene derecho a exigir del responsable su restablecimiento al estado anterior al hecho ilícito, para lo cual puede exigir ser restituida en naturaleza en el goce del bien que le ha sido privado (*infra* § 57).

Por otro lado, también puede ocurrir que del hecho ilícito se siga para el responsable un beneficio mayor que el daño sufrido por su propietario (quien incluso puede no haber sufrido daño alguno, como cuando se usa sin deterioro su propiedad). En estos casos, el hecho ilícito puede dar lugar a una acción restitutoria de los beneficios injustamente obtenidos, de acuerdo a un criterio análogo al enriquecimiento sin causa (*infra* § 60).

## § 2. MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RIESGOS

**5. Responsabilidad civil, seguros de accidentes y seguridad social.** a) Como se ha visto, el objeto del derecho de la responsabilidad civil es establecer los requisitos para que el daño sufrido por una persona dé lugar a una acción reparatoria. El principio jurídico subyacente es que cada cual corre con sus propios riesgos de daño, a menos que haya una razón jurídica para atribuirlo a un tercero. En otros términos, a menos que se cumplan los requisitos de la responsabilidad, “el principio general es que la pérdida de un accidente debe quedar donde caiga”.<sup>21</sup>

Ese principio tiene su fundamento moral en el orden de libertades que nos posibilita desarrollar nuestros planes de vida, porque de la misma manera como nos beneficiamos de la convivencia, recíprocamente debemos soportar los costos que surgen de esas relaciones. Lo mismo vale desde un punto de vista pragmático, porque se desincentivaría la espontaneidad de la vida en común si tuviéramos que asumir cualesquiera consecuencias imprevisibles e incontrolables que se derivan de nuestros actos. Una sociedad regida por un principio extenso de responsabilidad sería asfixiante, porque cada daño daría lugar a la búsqueda de un responsable, en la medida que casi siempre hay algún tercero cuya acción u omisión pudo evitar el perjuicio.

b) Por consiguiente, la pregunta esencial que plantea la responsabilidad civil dice relación con las razones que el derecho considera suficientes para que el costo de los daños sea atribuido a un sujeto distinto de la víctima.

<sup>21</sup> Holmes 1923 95. En el mismo sentido, Alessandri 1943 109, quien, refiriéndose a la teoría clásica de la responsabilidad basada en la culpa y siguiendo a Demogue señala: “Según ella, como los hombres pueden actuar libre e independientemente, cada uno debe recoger los beneficios que le proporcionen la suerte o su actividad y soportar los daños causados por la naturaleza o el hecho ajeno. No basta que un individuo sufra un daño en su persona o bienes para que su autor deba repararlo, es menester que provenga de un hecho doloso o culpable; sin dolo o culpa no hay responsabilidad”.

Los modelos de atribución de responsabilidad, que tradicionalmente han coexistido en todos los sistemas jurídicos, son el de *responsabilidad por culpa o negligencia*, que hace responsable al tercero que causa el daño a condición de que haya actuado con culpa o dolo, y el de *responsabilidad estricta u objetiva*, que establece la obligación de reparar todo daño que se produzca en el ejercicio de cierta actividad, cualquiera sea la diligencia empleada (de manera similar a lo que en el derecho contractual se conocen como obligaciones de garantía).

c) La *responsabilidad civil no es la única manera de enfrentar los riesgos de daño*. En verdad, sólo una parte menor de los daños corporales, morales o patrimoniales a que estamos expuestos pueden ser cubiertos por las reglas de la responsabilidad patrimonial. Por eso, parece preferible referirse a este ordenamiento como un derecho de responsabilidad por daños, y no simplemente como un ‘derecho de daños’; este es un concepto mucho más amplio, que comprende otros regímenes legales de cobertura de riesgos, como son la seguridad social y el seguro privado voluntario u obligatorio.<sup>22</sup>

d) El *seguro privado obligatorio* por daños a terceros procura la reparación de la víctima sobre la base de un deber legal de asegurarlos. Como condición para realizar una actividad, la ley impone el deber de contratar un seguro que cubra los riesgos de accidentes conexos a su desarrollo (el empleador respecto de los trabajadores, el propietario de un vehículo motorizado respecto de las víctimas de accidentes del tránsito).

El seguro puede tener alternatively por objeto cubrir el riesgo que genera la actividad, con independencia de las reglas de responsabilidad civil, en cuyo caso es técnicamente un *seguro de daños* a favor de un tercero; o bien, garantizar la responsabilidad de quien desempeña la respectiva actividad, caso en el cual es propiamente un *seguro de responsabilidad civil* (*infra* N°s 856 y 869).

En un sistema de seguros obligatorios, la reparación se rige por las normas de los contratos, pues la obligación de la compañía de seguros de indemnizar a la víctima del accidente emana del contrato de seguro. Sin embargo, el seguro es una especie de garantía forzosa impuesta por la ley en favor de las víctimas potenciales, de modo que no sólo cede en beneficio de quien lo contrata (como es usual en un contrato voluntario de accidentes), sino, muy especialmente, de la víctima del accidente (*infra* N° 867). El sistema de seguro obligatorio permite que el costo de los accidentes sea finalmente distribuido entre todos los candidatos a víctima, mediante un aumento del costo del bien o servicio en la proporción necesaria para cubrir el precio del seguro, que en derecho se conoce como *prima* (Código de Comercio, artículo 513). En definitiva, el seguro obligatorio es resultado de una política pública que persigue obtener grados óptimos de seguridad y de dispersión del costo de los accidentes, cuyo instrumento es el seguro privado.

<sup>22</sup> Por cierto que es legítimo tratar sistemáticamente los instrumentos legales de compensación de daños, pero ello supone asumir una perspectiva más general que la de la mera responsabilidad civil (ejemplar en este sentido, Cane/Atiyah 1999 4 y *passim*).



En consecuencia, la obligación de asegurar los daños a terceros no debe ser confundida con el seguro de responsabilidad civil: su objeto no es cubrir el riesgo de incurrir en responsabilidad, sino cualesquiera daños que se produzcan a consecuencias del ejercicio de una cierta actividad.<sup>23</sup> A su vez, usualmente el seguro de daños no cubre todos los perjuicios que resultan indemnizables bajo el estatuto de la responsabilidad civil, de modo que si el empleador o conductor cubierto por el seguro desarrolla la actividad sin cumplir con los deberes de cuidado que ella exige, se aplican las normas generales de responsabilidad contractual o extracontractual, según el accidente se produzca en el ámbito contractual, como en el caso del contrato de trabajo (*infra* § 51), o de relaciones espontáneas no sujetas a contrato, como ocurre con los accidentes causados por vehículos motorizados (*infra* § 52).

e) Funcionalmente análogos a los seguros privados obligatorios de daños son los *regímenes de seguridad social* (tengan la forma de seguros públicos o privados) y los *seguros voluntarios que cubren los daños del propio asegurado*. En ambos casos el objeto de la cobertura es el daño sufrido por la víctima, de modo que es irrelevante que el daño haya sido causado casual o negligentemente por un tercero, como ocurre con los seguros de daños a terceros y de responsabilidad civil. El antecedente de la reparación es simplemente el hecho de que el asegurado sea víctima de un daño, cualquiera sea su causa. El asegurado y beneficiario es directamente la víctima del daño, a diferencia de los seguros que cubren los riesgos de cierta actividad, donde quien toma el seguro es quien la desarrolla, pero en beneficio de las víctimas potenciales (como ocurre con el empresario respecto de sus trabajadores o con el propietario del vehículo motorizado respecto de las víctimas de accidentes del tránsito). En este caso, el seguro protege a la persona respecto de sus propios daños (por eso, en la práctica de seguros anglosajona es llamado *first party insurance*).<sup>24</sup> Los seguros voluntarios o forzosos contra los riesgos generales de sufrir daños son crecientemente considerados como los más eficientes instrumentos de protección frente a los riesgos de accidentes y enfermedades (*infra* N° 859).<sup>25</sup>

f) Uno de los mayores problemas que enfrenta el derecho de la responsabilidad civil es la oscuridad acerca de sus fronteras con los sistemas de seguro y de seguridad social.

En este libro, por razones que son explicables a la luz de los principios del propio derecho privado, se asume una posición más bien expansiva respecto de las condiciones de la responsabilidad civil (como se muestra en el énfasis en la objetividad de la culpa y en las presunciones de culpabi-

<sup>23</sup> Las áreas más importantes de seguro obligatorio en el derecho nacional son el seguro de daños personales causados por vehículos motorizados, establecido por la ley N° 18.490 (*infra* N° 542) y el seguro de accidentes del trabajo, establecido por la ley N° 16.744 (*infra* N° 496); en general, sobre los seguros obligatorios, *infra* N° 869.

<sup>24</sup> Problemas de concurrencia de indemnizaciones se suelen presentar cuando los seguros concurren con acciones de responsabilidad civil (*infra* § 58 g).

<sup>25</sup> Chabas 1993 88, Atiyah 1997 192.

lidad). Sin embargo, el enfoque intenta conservar la dimensión del derecho civil, esto es, atiende a la relación entre la víctima y el autor del daño. Así, se asume que el objeto esencial del derecho de la responsabilidad patrimonial es corregir el daño que una parte injustamente provoca a la otra.<sup>26</sup> En el fondo, una confusión acrítica de las áreas del derecho privado y del derecho social arriesga conflictos de valoraciones innecesariamente entrecruzadas, con el efecto de que se pierda el correcto discernimiento de las diversas tareas que cumple cada ordenamiento y se debiliten las funciones estructurales del derecho privado.<sup>27</sup>

Los regímenes de seguridad social y de seguros obligatorios cumplen la finalidad pública de proteger a las víctimas de accidentes. Los requisitos de procedencia varían, según se trate de un seguro de daños a terceros, de un seguro de responsabilidad civil o de un seguro de daños propios. Los principios normativos que operan en estos sistemas generales de protección frente a accidentes son los del contrato de seguro (de la manera como lo defina la ley que lo hace obligatorio) o del derecho social. Así, aunque sus objetivos reparativos parcialmente coinciden, tienen fundamentos diferentes a los de la responsabilidad civil. Una de las tareas de la doctrina jurídica es precisamente definir las líneas divisorias entre estos ordenamientos, evitando que se confundan.

Dependiendo de la extensión que tengan los regímenes de seguridad social y los seguros obligatorios para el ejercicio de ciertas actividades, el sistema de responsabilidad civil puede tener un rol más bien residual o complementario, como ocurre en la práctica con la responsabilidad por accidentes del trabajo (*infra* § 51 c); o puede ser un mecanismo de atribución de costos entre compañías de seguros. Aun así, es conveniente que mantenga su especificidad como orden que atiende a la relación de derecho privado entre el autor del daño y la víctima (*infra* N° 859).

**6. Responsabilidad por culpa.** a) La responsabilidad por culpa o negligencia es el más generalizado de los modelos de atribución de responsabilidad. En el derecho chileno, como en todos los sistemas jurídicos modernos, constituye el *estatuto general y supletorio de responsabilidad*, de modo que resulta aplicable a todos los casos que no están regidos por una regla especial diversa.

A la responsabilidad por culpa o negligencia se refieren los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, y a ella estará dedicada la mayor parte

<sup>26</sup> En general, la jurisprudencia parece compartir esta idea. Así, se ha fallado que “la reparación del daño es el principal efecto que nuestro legislador asigna a la responsabilidad delictual o cuasidelictual civil” (Corte de Santiago, 10.7.2002, RDJ, t. XCIX, sec. 2ª, 83); y que “del conjunto de preceptos que rigen las indemnizaciones provenientes del daño, se desprende que su procedencia, si bien lo presupone para quien lo experimente o sufre, respecto de la obligación de indemnizarlo para el que lo produce, cabe sólo como consecuencia de un delito o cuasidelito” (Corte de Santiago, 14.10.2002, RDJ, t. XCIX, sec. 2ª, 132); en igual sentido, Corte de Santiago, 31.12.2002, GJ 274, 212.

<sup>27</sup> Bydliniski 2004 348.



de este libro, atendido su carácter de estatuto general y supletorio. El análisis de este modelo de atribución de responsabilidad también permitirá comprender el régimen de responsabilidad estricta u objetiva, que si bien prescinde del requisito de la culpa, está sujeto a las demás reglas y requisitos del estatuto de responsabilidad por culpa.

b) Bajo un régimen de responsabilidad por culpa, la atribución de responsabilidad se *funda* en que el daño ha sido causado por un hecho negligente, esto es, realizado con infracción a un deber de cuidado. En este régimen de responsabilidad, la culpa no sólo sirve de fundamento, sino también de *límite* de la responsabilidad, porque la obligación reparatoria sólo nace a condición de que se haya incurrido en infracción a un deber de cuidado.

Así, la culpa o negligencia es antecedente de dos principios que definen negativa y positivamente el ámbito de la responsabilidad civil: el primero expresa que a falta de una razón para atribuir responsabilidad, el daño causado por un hecho cualquiera es soportado por quien lo padece (*casum sentit dominus*); el segundo señala que la culpa es una razón suficiente para hacer responsable a quien ha intervenido causalmente con su hecho en la producción de un daño.

c) Los *deberes de cuidado* que definen la actuación culpable pueden ser establecidos por el legislador, mediante la dictación de reglas de conducta orientadas a evitar accidentes (como típicamente ocurre en la Ley del tránsito); o bien, pueden ser el resultado de una regla no legislada, que debe ser definida por los jueces, recurriendo a la costumbre o a criterios prudenciales de diligencia y de cuidado (*infra* § 10 d 2 y 3).

Atendida la enorme plasticidad y variedad de la conducta humana, así como la cantidad de riesgos que impone la vida en sociedad, la mayor parte de los deberes de cuidado no pueden ser definidos con exhaustividad por la ley, quedando entregada su determinación a los jueces. En la materia existe una decisiva diferencia entre la responsabilidad civil y la penal, donde el requisito de tipicidad excluye la posibilidad de que el ilícito sea definido en alguna instancia judicial, sin la existencia de una ley anterior que describa y sancione la conducta.

d) La responsabilidad por culpa supone una valoración de la conducta del demandado, porque la obligación de reparar el daño causado sólo nace si aquel no ha observado un estándar de conducta debida. Esta exigencia suele llevar a error acerca de la naturaleza de la responsabilidad. Se acostumbra decir que la responsabilidad por culpa es *subjetiva*, en oposición a la responsabilidad estricta u objetiva. Lo cierto, sin embargo, es que desde el derecho romano *el juicio acerca de la culpa civil es objetivo*, en el sentido de que no atiende a las peculiares circunstancias personales del autor del daño, sino a la conducta que de éste puede esperarse según las circunstancias en que se encontraba.

Por lo mismo, la calificación de la conducta como negligente no constituye un juicio de reproche moral a la persona del demandado. La responsabilidad por culpa, como también la estricta, exige que el hecho sea imputable subjetivamente como *su* hecho al demandado; por eso, es con-



dición de la responsabilidad civil que el demandado sea capaz y que la acción pueda ser calificada de libre, en el sentido más elemental de que esté bajo su control (*infra* §§ 7 y 8). Pero allí se agota el aspecto subjetivo de la responsabilidad, porque el juicio jurídico de culpabilidad atiende a la conducta externa, que es valorada según un patrón objetivo de conducta debida (*infra* N<sup>os</sup> 42 y siguientes).

e) Los requisitos concurrentes de imputabilidad subjetiva de la acción y de infracción a un deber de cuidado como condiciones de la responsabilidad ponen la idea de *agencia humana* en el centro de la responsabilidad por culpa. Esa síntesis virtuosa de la acción humana y deberes objetivos de cuidado constituye su trasfondo moral y pragmático.

Desde el punto de vista *moral*, la responsabilidad queda limitada a las conductas que infringen los deberes de cuidado que nos debemos en el ejercicio de nuestra libertad. De este modo, establece un marco razonable al incesante esfuerzo por lograr nuestros propósitos en un mundo necesariamente imperfecto, de conocimientos y destrezas limitadas. La culpa proporciona un criterio para juzgar la relación entre el autor del daño y la víctima en la dimensión de la justicia correctiva. Aunque desde el punto de vista de la justicia correctiva haya casos en que se justifique establecer estatutos de responsabilidad estricta (*infra* N<sup>o</sup> 308), la ventaja de la culpa reside en la generalidad con que puede ser invocada como criterio justo para resolver el conflicto: cada vez que el daño se deba a dolo o negligencia hay una razón suficiente para atribuir responsabilidad civil.

Desde un punto de vista *pragmático*, la negligencia se ha mostrado como un criterio eficiente de atribución de responsabilidad. La responsabilidad por culpa asume como patrón de conducta el de una persona prudente y diligente, que pondera los riesgos de su acción, empleando el cuidado que las circunstancias exigen. Este modelo asume que hay un punto de equilibrio eficiente entre el cuidado excesivo y el descuido, de modo que naturalmente tiende a coincidir la diligencia debida con la conducta socialmente más eficiente (*infra* N<sup>o</sup> 66).

**7. Responsabilidad estricta u objetiva.** a) La responsabilidad estricta se diferencia técnicamente de la responsabilidad por culpa en que no exige negligencia del autor del daño. En su versión más pura, la responsabilidad estricta queda configurada por la *mera relación causal* entre el hecho del demandado y el daño sufrido por el demandante. Desde el punto de vista funcional, tiene como fundamento el riesgo creado por quien desarrolla la actividad respectiva y no la omisión de deberes de cuidado, de modo que es innecesario, a efectos de dar por establecida la responsabilidad, hacer un juicio de valor respecto de la conducta del demandado. Basta que el daño se produzca a consecuencia de una actividad cuyo riesgo la ley ha sometido a un estatuto de responsabilidad sin negligencia.

En este sentido, la responsabilidad estricta presenta una analogía con las denominadas *obligaciones de garantía* del derecho contractual (como la obligación de saneamiento que el vendedor tiene a favor del comprador en la compraventa), pues se asegura a las potenciales víctimas que todo



daño ocasionado en un cierto ámbito de riesgo deberá ser reparado por quien lo crea.

b) En el derecho contemporáneo también se han desarrollado modelos de *responsabilidad estricta calificada* por el resultado, que presentan analogía con la responsabilidad por culpa. Aunque no es el caso en el derecho chileno, este tipo de responsabilidad se ha expandido en el derecho comparado respecto de los productos defectuosos. Bajo un estatuto de responsabilidad por culpa se requiere que el daño producido por un producto se deba a un proceso de fabricación que no ha observado los estándares de debido cuidado; bajo uno de responsabilidad estricta pura, bastaría que el daño sea consecuencia del uso o consumo del producto. La idea de producto defectuoso se diferencia de la culpa en que no se atiende al proceso de fabricación, sino al resultado objetivamente defectuoso del producto; y se distingue de la responsabilidad propiamente estricta, en que no basta la causalidad para dar por establecida la responsabilidad, sino que es necesario un juicio de disvalor respecto del producto que ha intervenido causalmente en el daño (*infra* N° 302).

c) Como se anticipó, la responsabilidad estricta u objetiva es un régimen especial de derecho estricto, que rige ciertos ámbitos de conducta o tipos de riesgos definidos por el legislador. En consecuencia, *su fuente es la disposición expresa de la ley*.

En general, los regímenes de responsabilidad estricta están enfocados en el derecho comparado a ciertos riesgos típicos: accidentes del trabajo, productos defectuosos, algunos daños ambientales, energía nuclear, aviación comercial (*infra* N° 308).<sup>28</sup> No existe, sin embargo, uniformidad. Así se muestra, por ejemplo, en una materia tan importante como los accidentes del tránsito, pues mientras en el derecho europeo rigen generalmente estatutos especiales de responsabilidad estricta, en el derecho americano se suele seguir el estatuto general de responsabilidad por culpa; el derecho chileno adopta un camino intermedio, asumiendo en la materia un régimen de responsabilidad por culpa del conductor, con una obligación de garantía del propietario del vehículo por actuación negligente del conductor (*infra* § 52).

A las normas establecidas por estatutos legales especiales se agregan dos reglas de responsabilidad sin culpa del propio Código Civil, provenientes del derecho romano, referidas a animales fieros (artículo 2327) y a la caída de objetos de la parte superior de los edificios (artículo 2328 I).

<sup>28</sup> Un caso excepcional de responsabilidad estricta establecida bajo un supuesto de aplicación bastante general surgió de una interpretación que la Corte de Casación hizo del artículo 1384 del Código francés, que establece una regla de responsabilidad por el hecho de las cosas y personas que están bajo el cuidado (*garde*) de un tercero, en cuya virtud se da lugar a una responsabilidad de ese tipo cada vez que en el accidente intervenga causalmente una cosa detentada por ese tercero (Mazeaud/Chabas 1998 559). Es probable que esta interpretación *de lege ferenda* de esa norma haya determinado la enorme expansión, mayor que en cualquier otro sistema jurídico, de la responsabilidad en el derecho francés.

d) La mayor o menor extensión que se otorgue a la responsabilidad estricta dentro del ordenamiento de la responsabilidad civil depende de decisiones del legislador. Como se señaló, la responsabilidad civil supone enfrentar la pregunta acerca de cuáles daños estamos dispuestos a tolerar como costo de la vida en sociedad y cuáles tenemos derecho a que nos sean indemnizados. En otros términos, la atribución de responsabilidad civil supone una calificación previa del riesgo a la luz de los fines de la responsabilidad civil.

El establecimiento de estatutos de responsabilidad estricta ha sido justificado por razones de justicia correctiva (especialmente desde una perspectiva radicalmente individualista, que atiende a la lesión de un derecho como razón suficiente para imponer responsabilidad),<sup>29</sup> de justicia distributiva (en la medida que toda víctima queda indemnizada con independencia de la conducta del responsable),<sup>30</sup> de eficacia preventiva (en la medida que atribuye la responsabilidad a quien tiene el control del riesgo)<sup>31</sup> y de disminución de los costos administrativos del sistema de responsabilidad (porque evita juicios y, cuando se producen, reduce la prueba al daño y la causalidad).<sup>32</sup> El análisis comparativo de la responsabilidad estricta y por negligencia a la luz de los fines de la responsabilidad civil se efectuará en el capítulo dedicado a la responsabilidad estricta (*infra* § 36).

Entretanto, conviene reiterar que la vida en sociedad conoce múltiples acciones que causan perjuicios, y que, sin embargo, estamos dispuestos razonablemente a soportar como cargas de la convivencia o, incluso, como condiciones justas y eficientes para el progreso (como ocurre con los daños puramente económicos que ocasiona la competencia en los mercados), aunque ello signifique que algunos tengan que asumir turbaciones o fracasos. Un ordenamiento que adopte la responsabilidad estricta como regla general transformaría por completo la forma como nos relacionamos en sociedad, porque son pocos los daños que no pueden ser atribuidos a alguna acción u omisión de otros (¿es responsable el ciego del accidente sufrido por quien lo ayuda a atravesar la calle?).

Por eso, aunque los sistemas jurídicos difieren acerca de la extensión de los riesgos sujetos a estatutos de responsabilidad estricta, en todos se preserva la responsabilidad por culpa como régimen general y supletorio, en cuanto permite contar con un criterio básico para atribuir responsabilidad, que satisface, a la vez, exigencias de justicia correctiva y de adecuada prevención.

**8. Fronteras entre la responsabilidad estricta y la responsabilidad por culpa.** a) Las formas puras de responsabilidad estricta y por culpa son claramente distinguibles: mientras esta última se construye en torno al

<sup>29</sup> La más brillante exposición de esta doctrina en Epstein 1973 151.

<sup>30</sup> Honoré en Owen 1995 83.

<sup>31</sup> Calabresi 1970 145.

<sup>32</sup> Ídem 45 y 288.



hecho voluntario ilícito (culpable en sentido civil), en la responsabilidad estricta basta la causalidad material entre la acción y el daño. En el estado actual de desarrollo del derecho de la responsabilidad civil, este esquema mantiene su validez como representativo de los dos grandes modelos de responsabilidad. En la práctica, sin embargo, muchos caminos los acercan.

b) Se ha visto que la *objetividad de la culpa* tiende a desplazar el juicio de reproche desde la persona del demandado hacia la valoración de la acción realizada. De este modo, como en el caso de la responsabilidad estricta, el juicio civil de culpabilidad es jurídico y no moral (*infra* N° 42).

A su vez, se ha visto que en el derecho comparado es usual que la responsabilidad estricta u objetiva tenga la forma de una responsabilidad estricta *calificada*, que exige algo más que la mera causalidad entre la acción de un agente y el daño. En este caso, la diferencia con la responsabilidad por culpa reside en dónde se pone la atención: en la culpa lo determinante es la conducta del demandado, mientras que en la responsabilidad estricta calificada lo es la calidad de un producto o de un servicio. La diferencia conceptual es sutil, pues en un caso se atiende a la acción y en el otro al resultado, pero en una y otra situación la responsabilidad supone un juicio objetivo de reproche.

c) Una de las mayores dificultades de la responsabilidad por culpa reside en las exigencias de *prueba*. Ellas suelen ser abordables con cierta facilidad cuando se trata de accidentes sencillos, donde el deber de cuidado infringido está a la vista. Por el contrario, hay ocasiones en que la prueba plantea un desafío mayor, a veces inabordable, para el demandante; o puede ocurrir que las circunstancias del accidente hablen por sí mismas, en orden a que *prima facie* el daño sea atribuible a culpa del demandado. En estas situaciones es frecuente que el derecho altere el *onus probandi*. Las presunciones de culpa por el hecho propio (artículo 2329)<sup>33</sup> y por el hecho ajeno (artículos 2320 y 2322)<sup>34</sup> son un importante correctivo a la desventaja estratégica en que puede encontrarse la víctima, pues coloca al demandado en la situación de descargarse probando la diligencia. La diferencia con la responsabilidad estricta reside en estos casos precisamente en que la prueba de diligencia resulta admisible.

d) En definitiva, el derecho de la responsabilidad patrimonial ha adquirido una complejidad que le permite adaptarse a circunstancias muy diversas. Y ocurre que esa complejidad no queda suficientemente explicada con la distinción entre las categorías de la responsabilidad por negligencia y estricta, porque una y otra presentan calificaciones que a menudo las alejan de los modelos puros.

<sup>33</sup> *Infra* § 14.

<sup>34</sup> *Infra* §§ 17 y 18.

§ 3. FINES Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL<sup>35</sup>

**9. El sentido de la pregunta por los fines y valores.** a) La pregunta por los fines y valores de la responsabilidad civil tiene dos caras, que suelen confundirse. Ante todo, puede referirse a un método para *comprender* la lógica interna del régimen de responsabilidad civil; pero también suele ser planteada para *proponer* los fines que el ordenamiento debiera perseguir, lo que usualmente va asociado a razones para preferir uno u otro modelo de atribución de responsabilidad civil. Desde el primer punto de vista, los fines ayudan a la tarea hermenéutica de discernimiento práctico del derecho a efectos de su aplicación; desde el segundo, forman parte del discernimiento de políticas públicas en materia de responsabilidad (sea que su ejecución se atribuya al legislador o a los propios jueces).<sup>36</sup>

Tratándose de un ordenamiento complejo, que dispone de una base normativa compuesta por unas pocas reglas generales en el Código Civil, es inevitable que la pregunta por los principios y valores que subyacen tras el sistema de responsabilidad tenga un significado práctico determinante en el desarrollo *interno* de esta área del derecho de obligaciones. Los fines y valores son el elemento dinámico del sistema de responsabilidad, pues permiten discernir la regla correcta en el contexto institucional de una práctica doctrinaria y judicial. Por eso, en razón de esta lógica interna, no es un despropósito afirmar que una decisión es conforme a derecho aunque el caso no pueda subsumirse en una regla ya formulada.<sup>37</sup> De modo consistente con esta premisa, las instituciones judiciales están diseñadas para maximizar la posibilidad de que todo elemento relevante del caso judicial pueda ser objeto de un análisis que atienda a todas sus circunstancias.<sup>38</sup>

En contraste, el ordenamiento de la responsabilidad civil también permite analizar la responsabilidad civil desde una perspectiva *externa*, que atiende al estatuto de responsabilidad socialmente más eficaz. La pregunta por la eficacia de las reglas permite desarrollos analíticos muy sutiles a la luz del método económico, porque el derecho de la responsabilidad civil cumple una función preventiva, que se basa en una lógica de mercado, al establecer costos (que se expresan en el deber de indemnizar) a quienes desarrollan actividades que generen riesgos. Desde esta perspectiva, la pregunta relevante se refiere al sistema de responsabilidad más eficiente para lograr una adecuada ecuación entre los costos de prevención para evitar los accidentes y los daños que se evitan a consecuencia de estas precauciones.

b) En estas dos perspectivas analíticas se muestra el principal contraste de la filosofía moderna, entre la moral de lo *correcto*, que atiende a lo que

<sup>35</sup> Parte esencial de esta sección fue expuesta en Barros en Varas/Turner 2005.

<sup>36</sup> Sobre esta distinción, que resulta decisiva para discernir las principales doctrinas acerca de los fines del derecho de la responsabilidad patrimonial, Coleman en Postema 2001 183.

<sup>37</sup> Wittgenstein *Investigaciones filosóficas* 199; respecto de esta forma de descubrir en el derecho privado una regla no positivada de antemano, Barros 1984 78.

<sup>38</sup> Atria 2005 132.



se *debe* hacer en consideración a exigencias de justicia, y la moral *pragmática*, que atiende a los resultados de la acción para discernir lo que es más conveniente en el balance de costos y beneficios. Si se revisa la extensa literatura contemporánea acerca de los fines de la responsabilidad civil, se comprueban nítidamente estas dos líneas de argumentación.<sup>39</sup>

c) Aunque se adopte una perspectiva de derecho privado, que tiende a concebirlo como un ordenamiento que posee una lógica interna, cuestión bien explicada por la idea de justicia correctiva, es un error práctico y conceptual asumir que el conjunto de fines y valores que orientan una institución compleja conforma necesariamente un sistema coherente y cerrado.<sup>40</sup> Los fines y principios son directivas que permiten sopesar las diversas normas que pueden ser planteadas para resolver un conflicto y son criterios para el desarrollo jurisprudencial del derecho que suelen operar argumentativamente en diversas direcciones (como se muestra, por lo demás, en la naturaleza dialéctica del proceso judicial).

El ordenamiento de la responsabilidad civil se sostiene en normas legales de gran generalidad (artículos 2284, 2314, 2320 y 2329), que dejan entregado su desarrollo subsecuente a la jurisprudencia y a la doctrina. El ordenamiento de la responsabilidad civil ha crecido en innumerables institutos más concretos, que se muestran en una práctica judicial y dogmática que ha devenido progresivamente en más compleja (como se intenta mostrar en este libro). Un supuesto de racionalidad exige que esa práctica sea suficientemente autorreflexiva y abierta a los principios prácticos y valorativos que la orientan. Sólo así puede aspirar a ser inteligible y mínimamente coherente, aun estando conscientes de que siempre se trata de un estado de cosas provisorio y revisable.

d) En las secciones siguientes se intentará ordenar los fines de la responsabilidad civil a partir de dos ideas reguladoras. La primera persigue com-

<sup>39</sup> La discusión se ha desarrollado preferentemente en el medio jurídico de habla inglesa, aunque tiene sus raíces en las doctrinas de Aristóteles y de la escolástica sobre la justicia, en el personalismo ético de Kant y en el empirismo pragmático anglosajón (D. Hume, J. Bentham). En circunstancias que este no es un libro de filosofía del derecho, no pretendo aventurarme con originalidad en estos terrenos, de modo que me limito a hacer algunas referencias bibliográficas que me han resultado particularmente importantes. Entre ellas, me parecen relevantes en la afirmación del derecho privado como un orden fundado en la idea de justicia correctiva, Coleman 1992, Fletcher 1972, Gordley en Owen 1995 y Weinrib 1995; en el análisis instrumental (económico) de la responsabilidad, Holmes 1923, Calabresi 1970, Epstein 1999 (con la ventaja de ser un libro que desarrolla una exposición completa sobre el derecho de *torts*), Posner 1992 y Shavell 1987; las mejores exposiciones generales del derecho de la responsabilidad desde una perspectiva funcional me parecen Fleming 1985 y Kötz/Wagner 2006 (en este libro se sigue especialmente la edición anterior, Kötz 1991); para un enfoque pluralista, que asume que el estatuto de la responsabilidad cumple diversos fines (aunque críticos de algunas premisas ingenuas del enfoque económico), Cane 1996, Honoré en Owen 1995 y Honoré 1999. Véanse también las notas siguientes.

<sup>40</sup> Un análisis de los fines encontrados de la responsabilidad civil en Deutsch 2002 b; en general, acerca de la pluralidad de principios en el derecho civil, Esser 1956 113, Auer 2005 10.



prenderla como una práctica de adjudicación de responsabilidad que resulta inteligible a la luz de la antigua categoría aristotélica de la justicia correctiva, en tanto atiende a la relación entre dos partes que son tenidas por iguales, como es característico del derecho privado. La segunda asume una perspectiva instrumental y pragmática, típicamente de las políticas públicas, que entiende las reglas de responsabilidad civil como instrumentos de dirección de la conducta a efectos de obtener consecuencias deseables (en especial, la prevención de los accidentes en un grado socialmente óptimo).

El camino más tentador es asumir que ambas dimensiones son relevantes para la comprensión y desarrollo del derecho de la responsabilidad. Esa actitud suele ser ingenua, porque se trata de una discusión filosófica que durante siglos ha mostrado no tener puntos de compromiso.<sup>41</sup> Y aun aceptando que los hubiese, es difícil discernir cuáles preguntas deben ser respondidas en atención a un criterio de justicia y cuáles pragmáticamente. La experiencia muestra, sin embargo, que la radicalidad de la disputa *filosófica* acerca de la naturaleza del deber de indemnizar no se transmite a la práctica *jurídica*. Pareciera que es preferible una actitud pragmática en el sentido más general, porque si bien su estructura básica puede ser comprendida a la luz de la idea de justicia correctiva, en su desarrollo más detallado en materias críticas (como son la determinación del cuidado debido, de los daños por los cuales se responde, de la cercanía que debe haber entre el hecho del demandado y daño), se aceptan con naturalidad argumentos que atienden a las consecuencias que supone adoptar una u otra decisión.

En definitiva, todo indica que la *justicia correctiva establece una condición que debe satisfacer toda decisión en materia de responsabilidad*; sin embargo, con frecuencia decisiones alternativas son compatibles con criterios de justicia, lo que justifica un análisis pragmático, que atiende a las consecuencias.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ejemplar en este sentido, la crítica deontológica de Coleman 2003 a los supuestos normativos del análisis económico de Kaplow/Shavell 2002.

<sup>42</sup> En la práctica del derecho asumimos que siempre es posible efectuar un sopesamiento de bienes y usualmente cometemos el error de pensar que ello no plantea problemas lógicos significativos. Las dificultades de una elección en que participan preferencias concurrentes de distintas personas fueron esencialmente mostradas en Arrow 1963; dificultades análogas pueden plantearse cuando se trata de conceptos valorativos concurrentes para comprender una institución jurídica. Por eso, parece correcta la percepción de Weinrib 1995 95, en orden a que la argumentación debe adoptar una estructura unitaria, que él entiende que sólo puede provenir de la idea de justicia correctiva. En conciencia de estas dificultades, en este libro se asume que el derecho de la responsabilidad patrimonial *debe* ser coherente con postulados de justicia correctiva (porque, de lo contrario, abandona su pretensión justificatoria más elemental), sin perjuicio de que preguntas abiertas (que suelen ser muchas) requieran un análisis consecuencialista (como ocurre, por ejemplo, con la determinación en concreto de los deberes de cuidado). Sobre las dificultades de un pluralismo metódico en el derecho de la responsabilidad, incluyendo proposiciones para manejarlas, Chapman en Postema 2001 280. El enfoque aquí adoptado, que no es infrecuente en el derecho penal, supone que algunos principios operan como condiciones para atribuir responsabilidad (justicia correctiva) y otros como fines (disminuir las conductas indeseables); un desarrollo lúcido de esta idea en Honoré en Owen 1995 90.



a. *Justicia correctiva: la pregunta por la justicia en la responsabilidad patrimonial*

**10. La pregunta por la regla justa de atribución de responsabilidad.** a) La idea de justicia exige asumir un enfoque deontológico para justificar la responsabilidad patrimonial. La pregunta se refiere a las condiciones para que sea *correcto* atribuir responsabilidad a una persona por los daños que sufre otra.

La idea de justicia puede plantearse en distintos grados de generalidad. Puede asumir la dimensión de la sociedad en su conjunto, caso en el cual se pregunta por el orden básico de convivencia; o puede asumir la dimensión de la relación interpersonal del autor del daño con la víctima. La idea de justicia correctiva atiende a esta última dimensión.

b) En su sentido más general, la idea de justicia responde a una pregunta respecto del *orden político más equitativo*, esto es, se interroga por el orden básico de convivencia que mejor compatibiliza los bienes de la libertad, de la seguridad y de la igualdad. Este enfoque corresponde a la tradición contractualista desarrollada desde Hobbes hasta Rawls y concibe las relaciones privadas en la dimensión más general de la sociedad política. Atendido el nivel de abstracción en que el tema se plantea, la pregunta por las condiciones de la responsabilidad deviene eminentemente en una cuestión política, pues atiende a la dimensión más general de una correcta ecuación de libertad y de seguridad en el marco general de la distribución de bienes al interior de la sociedad.<sup>43</sup> Un modelo de esta naturaleza asume inevitablemente que la responsabilidad civil es el resultado de políticas públicas en materia de prevención y de distribución de riesgos. Se trata típicamente del modo de pensar del legislador racional, que se ve en la necesidad de componer intereses al interior de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, cuando se decide establecer mediante una ley especial un régimen de responsabilidad en materia de daños al medio ambiente. La decisión debe valorar la seguridad, la manera como se afecta la libertad de emprender y, en definitiva, se adopta sopesando los resultados de una u otra alternativa reguladora en la dimensión del bien general.

c) En el otro extremo, la idea de justicia puede ser desarrollada atendiendo exclusivamente a la víctima o al autor del daño. Se tiene en vista a la víctima del accidente si se asume que el fin del ordenamiento de la responsabilidad civil es la *compensación* del daño que ha sufrido (*infra* N° 12); por el contrario, si a la responsabilidad se le atribuye un fin de *retribución* del mal causado, la mirada se dirige al autor del daño, y se intentará determinar las condiciones para formularle un juicio de reproche personal. Aunque ambas

<sup>43</sup> Es el enfoque de Keating en Postema 2001 52, quien construye un modelo de atribución de responsabilidad sobre la base de la 'persona razonable promedio', que a la manera de los participantes en el contrato relativo a las reglas constitucionales básicas, toma distancia respecto de sus propios intereses, a la manera de un observador externo capaz de discernir el valor que tiene la seguridad en la definición de las precauciones que aseguran frente a riesgos y que permiten la colaboración entre personas libres e iguales.

perspectivas suelen aparecer en el análisis de la responsabilidad patrimonial, presentan la dificultad de atender unilateralmente a la posición de una de las partes de la relación obligatoria, de modo que no dan una razón suficiente para que la víctima reciba compensación de *este* demandado o, al revés, para que el responsable deba indemnizar a *esta* víctima.

d) La idea aristotélica de la *justicia correctiva* ha sido redescubierta en los últimos años como el núcleo central de una justificación normativa y de una adecuada comprensión del derecho de la responsabilidad patrimonial, precisamente porque atiende a *la relación entre el autor del daño y la víctima*. En verdad, la idea de justicia correctiva ha devenido en el contrapunto del análisis económico de la responsabilidad, que pareció transformarse en una doctrina por completo dominante, especialmente en el derecho norteamericano, a partir de la década de 1970. Atendida la extensión y sutileza de la literatura relevante, parte esencial de esta sección se dedicará a mostrar los aportes y limitaciones de esa idea reguladora.

**11. Decaimiento de la idea de justicia retributiva.** a) El sentido más arcaico de justicia responde al sentimiento de retribución. Las más antiguas legislaciones conocidas no distinguen los efectos patrimoniales y propiamente penales que se siguen de los ilícitos. Sin embargo, ya en los orígenes de la responsabilidad civil se encuentra la idea de sustituir la retribución penal por una compensación económica (*infra* N° 22 b). En ese preciso momento ya comienza el retroceso de la función puramente retributiva de la responsabilidad patrimonial.

b) Desde el punto de vista de la estructura de la responsabilidad, el decaimiento de la función retributiva se muestra en la evolución histórica del ilícito civil básico, como es la culpa o negligencia. Desde el derecho romano, el concepto civil de culpa tiene una connotación esencialmente objetiva (*supra* N° 6, *infra* N° 42), de modo que las condiciones subjetivas de la responsabilidad se reducen a las más elementales de la capacidad (que en algunos ordenamientos también está en retirada) y de la libertad de la acción.<sup>44</sup> En otras palabras, el derecho civil establece requisitos muy básicos para que el acto pueda ser atribuido subjetivamente al demandado; cumplidos esos requisitos elementales, el juicio de valor recae objetivamente en la conducta y no en la reprochabilidad moral del autor del daño. Bajo tales condiciones, la atribución de responsabilidad difícilmente puede ser entendida desde una perspectiva retributiva. En ello existe una diferencia de grado con el derecho penal, donde la culpabilidad es un juicio que tiene un componente subjetivo (aunque haya generalizado acuerdo en que la retribución no es su finalidad).

c) Por otro lado, si la responsabilidad civil cumpliera una función retributiva, el monto de la indemnización de perjuicios dependería de la intensidad de la culpa del demandado. Por el contrario, en el derecho moderno, en virtud del principio de reparación integral del daño, la vícti-

<sup>44</sup> *Infra* §§ 7 y 8.



ma debe quedar indemne de todo daño, con independencia de la gravedad del ilícito (*infra* N°s 163 y 200).

Sin embargo, la función punitiva suele reaparecer bajo nuevas formas en el derecho civil. En algunos sistemas jurídicos se reconocen *indemnizaciones punitivas*, esto es, verdaderas penas civiles que soporta el responsable cuando su conducta es particularmente impropia. Con todo, la finalidad más reconocida de la indemnización como pena civil es de prevención general y no retributiva, pues pretende desincentivar la comisión de ilícitos particularmente graves (*infra* N° 198).

Asimismo, la práctica jurisprudencial chilena tiende a incorporar un elemento punitivo en la valoración del *daño no patrimonial*: en circunstancias que éste no tiene parámetros económicos de determinación, al momento de apreciarlo los jueces suelen incorporar, explícita o implícitamente, consideraciones que no atienden a la intensidad del perjuicio, sino a la gravedad del ilícito o a las capacidades económicas del demandado (*infra* N° 201).

**12. Fines compensatorios de la responsabilidad patrimonial.** a) A primera vista, todo indica que la compensación de las víctimas de los accidentes es un fin primordial de la responsabilidad civil. En efecto, por lo general, el juicio de responsabilidad civil tiene por objeto que se declare una indemnización, cuya medida es el daño sufrido.<sup>45</sup>

Con todo, aunque la pretensión del demandante sea obtener una compensación, de ello no se sigue que el sistema en su conjunto deba ser concebido a la luz de esa finalidad. La compensación de la víctima sólo tiene lugar cuando se cumplen las condiciones de la responsabilidad. Porque del mismo modo como la finalidad preventiva del ordenamiento no es evitar a cualquier costa que ocurran accidentes, tampoco la exigencia de justicia es asegurar a las víctimas compensación a todo evento, por el solo hecho de haber tenido el demandado alguna participación causal en el resultado dañoso. En verdad, el derecho de la responsabilidad civil se refiere por igual a las condiciones para dar lugar a la responsabilidad, como al fracaso de las pretensiones reparatorias.<sup>46</sup>

Esta explicación es consistente con la práctica de la responsabilidad civil en los ordenamientos contemporáneos. Sin embargo, hay matices que conviene aclarar, porque la idea de compensación como fundamento de la responsabilidad suele aparecer en dos extremos argumentativos, esto es, tanto en una doctrina libertaria de la responsabilidad (que expresa un individualismo radical) como en una doctrina que atribuye a la responsabilidad una función de socorro de la víctima (que conceptualmente la acerca al seguro privado y a la seguridad social).

<sup>45</sup> Así, se ha fallado que “nuestro derecho consagra el principio de la reparación integral o completa del daño, aplicable en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual” (Corte de Santiago 1.9.2003, GJ 281, 104); y que “la reparación del daño es el principal efecto que nuestro legislador asigna a la responsabilidad delictual o cuasidelictual” (Corte de Santiago, 10.7.2002, RDJ, t. XCIX, sec. 2°, 83).

<sup>46</sup> Kötz/Wagner 2006 25.

b) Intuitivamente, el fin compensatorio de la responsabilidad da cuenta de la idea de justicia correctiva, porque conduciría a ‘anular’ los efectos dañinos producidos por una acción.<sup>47</sup> En verdad, la *doctrina de la anulación* no atiende a la relación entre la víctima y el autor del daño, sino unilateralmente a los intereses del titular de un derecho. Desde el punto de vista pasivo, significa que nos hacemos cargo de todas las consecuencias de nuestras acciones, positivas (apropiándonos de los beneficios) y negativas (respondiendo por las pérdidas). La responsabilidad es concebida como una derivación de la propiedad y de la titularidad sobre otros derechos: en la medida que el derecho es afectado, el mal da lugar *ipso iure* a la reparación.

Desde esta perspectiva radicalmente individualista, no es necesario indagar otras razones que la causalidad para que haya lugar a la responsabilidad, porque sólo de esa manera se garantiza la prioridad de los derechos. El resultado práctico sería una responsabilidad estricta generalizada. Más allá de las dificultades que plantea un estatuto general de responsabilidad estricta (*supra* N° 7 d), surge la dificultad adicional de que los accidentes usualmente suponen la intervención causal de diferentes personas, incluida la propia víctima, de modo que para atribuir la responsabilidad (o para excluirla) se requiere un criterio de discriminación entre las distintas causas, que una doctrina de tal generalidad no puede ofrecer; a menos que se entre en calificaciones para sopesar las distintas causas, que inevitablemente la acercarán a la noción de culpa.<sup>48</sup>

c) El fin compensatorio aparece también en la dimensión social de proteger a la víctima de un accidente. La consecuencia es que la compensación no es tenida por el *resultado* del juicio de responsabilidad civil, sino por su *finalidad*. Es interesante como G. Viney, la principal impulsora de este fundamento de la responsabilidad en la doctrina francesa contemporánea, plantea coloquialmente sus premisas: el fin primordial de la responsabilidad civil es ir en socorro de la víctima, de modo que la tarea del ordenamiento privado sería ir eliminando progresivamente excepciones, como las de culpa de la propia víctima o la de caso fortuito, que dificultan ese fin principal.<sup>49</sup>

Esta actitud genera severas dudas. Desde el punto de vista de la justicia correctiva, ignora por completo la posición del demandado, en la medida que tiende a atribuirle responsabilidad incluso por actos que están fuera de su control; y, desde el punto de vista general de los riesgos, establece un estatuto protector privilegiado para el pequeño grupo de víctimas que sufren daños atribuibles causalmente a otra persona.<sup>50</sup> Entre los muchos

<sup>47</sup> Esta idea fue formulada por Coleman, quien luego la ha criticado, porque no se hace cargo de la dimensión de correlatividad entre el hecho del demandado y el daño sufrido por la víctima, que es supuesta por la justicia correctiva (Coleman 1992 306).

<sup>48</sup> La idea de responsabilidad civil por resultados, sobre la base de una interpretación libertaria, en Epstein 1973; para una sintética nota crítica, Perry en Postema 2001 85.

<sup>49</sup> Viney 1997 335.

<sup>50</sup> Así se muestra en el enfoque comprensivo de Cane/Atiyah 1999, quienes analizan la responsabilidad civil como un subconjunto de los mecanismos legales para enfrentar riesgos.

riesgos que nos afectan (salud, empleo, propiedad), sólo algunos pueden ser calificados bajo reglas de responsabilidad (por expansivas que sean), de modo que si se entiende que el fin es la protección frente al infortunio, los caminos legales deberían ser mucho más comprensivos que el estatuto de responsabilidad.

En verdad, es muy discutible que la compensación de la víctima sea tarea *per se* de la responsabilidad civil. Cuando la sociedad desea proteger a ciertos grupos vulnerables puede establecer regímenes de responsabilidad estricta, pero también tiene el camino de los *seguros obligatorios* (como ocurre con los accidentes del trabajo y los riesgos del tránsito) o de la *seguridad social*, que sí tienen por principal finalidad compensar los daños. Finalmente, si la víctima es aversa al riesgo, siempre está abierto el camino del seguro contra daños propios, que cubre los riesgos generales de la vida, cualquiera sea su fuente. En definitiva, el argumento de la seguridad de la compensación como criterio de atribución de una obligación indemnizatoria, tiende a disolver la pregunta por la responsabilidad del demandado respecto de la víctima (esto es, la relación de derecho privado entre ambos) en una cuestión muy distinta, relativa a los mecanismos institucionales para la protección frente a los riesgos generales de la existencia.<sup>51</sup> El efecto es que el derecho civil se transforma en un instrumento imperfecto del derecho social.

**13. La justicia correctiva como fin de la responsabilidad patrimonial.** a) El concepto de justicia correctiva tiene sus orígenes en la *Ética Nicomaquea* de Aristóteles.<sup>52</sup> El texto es de gran simplicidad, aunque no por ello superficial, y revela una comprensión refinada de la relación de derecho privado.

Aristóteles define el lugar donde la pregunta por la justicia correctiva resulta relevante: se plantea en los tratos mutuos, tanto voluntarios (contractuales) como involuntarios (extracontractuales). Lo característico de estas relaciones es la igualdad; es indiferente la riqueza y el mérito, pues el derecho sólo mira a la naturaleza del daño y a la injusticia cometida. Quien comete un injusto se apropia de lo que no le pertenece; esta apropiación ocurre aunque no se haya hecho más rico, porque ha actuado en atención al propio interés, sin considerar el ajeno. La justicia correctiva persigue restablecer la igualdad que ha sido rota por el ilícito: en circunstancias que la justicia correctiva asume que las partes de una relación de derecho privado son iguales, el papel del juez es llevar las cosas al punto medio, en que no hay ganancia ni pérdida injusta. En sede extracontractual, entonces, la acción tiene por objeto reparar el daño injustamente causado.

<sup>51</sup> En su clasificación de los costos de los accidentes, Calabresi llama secundarios a los costos de compensación (siendo primarios los daños que sufren las víctimas y terciarios los administrativos); lo que desde esa perspectiva aparece como costo, en la dimensión de la justicia distributiva aparece como *compensación*, estimando que los mejores mecanismos para procurarla son buscar el indemnizador solvente (*deep pocket*) y la responsabilidad estricta (Calabresi 1970 39).

<sup>52</sup> Aristóteles *Ética Nicomaquea* 5.4,1132 a.



b) La doctrina de la responsabilidad civil, caracterizada en las últimas décadas por un grado extremo de reflexividad, ha redescubierto en Aristóteles un paradigma para la comprensión 'interna' del derecho privado, que atiende exclusivamente a la relación entre las partes y no al orden social en su conjunto.<sup>53</sup>

Ante todo, la idea de justicia correctiva expresa la estructura formal de la argumentación en el derecho privado. A diferencia del trasfondo instrumental de las políticas públicas, que asumen que el derecho es un medio para obtener otros fines, en la idea de justicia correctiva concurren en una unidad de sentido el fin (la justicia en la relación privada) y el medio (el restablecimiento de la igualdad afectada por el acto injusto). Así, la justicia correctiva tiene la ventaja de ser una idea integradora de los elementos de la responsabilidad civil: el injusto, el daño y el derecho a la reparación.

Su función constitutiva de la relación de derecho privado se muestra en la idea de correlatividad entre el deber y el derecho que desarrolla Aristóteles.<sup>54</sup> En la situación típica, hay lugar a una relación obligatoria entre el responsable y la víctima; precisamente porque aquél ha infringido un deber causando un daño, esta última tiene el derecho a ser restablecida a la situación anterior. La idea aristotélica de que ambas partes de la relación son iguales en la injusticia se muestra en esta correlatividad de la relación jurídica entre las dos partes. El elemento constitutivo de la relación obligatoria no es el 'bolsillo profundo' o la estrategia de atribución de riesgos (como en el análisis económico), sino la peculiar relación que nace entre la víctima y el responsable.<sup>55</sup>

**14. Valor práctico de la idea de justicia correctiva en el sistema de la responsabilidad civil.** a) La crítica más fuerte a la idea aristotélica de la justicia correctiva proviene de la tradición analítica, especialmente de Kelsen. Éste sostenía que la justicia correctiva era una noción tautológica, que no

<sup>53</sup> La bibliografía en la materia es inabordable. Me parece que el libro más influyente en el rescate conceptual de la idea de *derecho privado* a la luz de la justicia correctiva es Weinrib 1995; particularmente interesante resulta el intento de Coleman de plantear la justicia correctiva en relación con la práctica de adjudicación judicial en materia de responsabilidad civil (Coleman en Owen 1995 69). Las compilaciones de Owen y Postema contienen excelentes contribuciones sobre la materia (Birks en Owen 1995, Christie en Owen 1995, Coleman en Owen 1995, Gordley en Owen 1995, Honoré en Owen 1995 y Chapman en Owen 1995; Coleman en Postema 2001, Perry en Postema 2001, Ripstein/Zipursky en Postema 2001 y Stone en Postema 2001).

<sup>54</sup> Weinrib 1995 142, Coleman en Postema 2001 184.

<sup>55</sup> Weinrib 1995 143; así expuesta, la doctrina de la justicia correctiva presenta notoria cercanía con el concepto hegeliano de una racionalidad interna al derecho privado (Hegel 1821 § 31). De hecho, un trabajo temprano de Weinrib se refiere al concepto de derecho privado en Hegel (Weinrib 1989). Un aspecto poco explorado de la justicia correctiva como elemento estructural de la relación de derecho privado se refiere a la función neutral que corresponde a la justicia en un estado de derecho, que se opone a una función que atiende a finalidades que trascienden el caso; al respecto, Atria 2005 135.



agregaba información práctica. En efecto, el juez, para definir el punto medio, necesita la medida de lo que se habrá de tener por justo, y ese criterio no es dado por la idea de justicia, sino que se da simplemente por supuesto.<sup>56</sup> En el fondo, se trataría de un concepto normativo vacío, carente de contenido semántico, porque no proporciona información acerca de lo que en concreto debe tenerse por justo.

b) En verdad, la idea de justicia correctiva se limita a establecer un horizonte comprensivo de las preguntas que plantea la responsabilidad patrimonial. En cierto sentido, sus razones se muestran en las justificaciones que emplean los jueces al dar lugar o rechazar la pretensión indemnizatoria, para lo cual argumentan con toda naturalidad en torno a la relación interna entre el ilícito y el daño como fundamento de la responsabilidad.<sup>57</sup>

En definitiva, la mejor contribución de la idea de justicia correctiva es para comprender y hacer reflexiva, a la vez, la práctica de la responsabilidad patrimonial. Permite hacer inteligible su estructura básica a la luz de un concepto que resulta consistente con la manera de argumentar y decidir de los jueces. Pero también hace posible racionalizar esa práctica, porque siempre envuelve una pregunta respecto de lo que es correcto en casos como el que se debe decidir, llevando a atender a la relación en su conjunto. La idea de justicia correctiva asume que existe una correlatividad entre los elementos básicos de la responsabilidad, esto es, el hecho humano y el daño sufrido por la víctima.<sup>58</sup> Por lo mismo, su práctica concreta no tiene por antecedente una idea abstracta que se aplica por mera derivación. Por el contrario, lo interesante es que esa práctica haya llegado a ser diferenciada y compleja sin que haya estado orientada por un propósito o directiva externa, sino caso a caso, resolviendo innumerables preguntas concretas (como las que se desarrollan en este libro), cuya estructura común viene dada porque la víctima de un daño pide que se declare su derecho respecto de quien lo provocó. Por eso, la idea de justicia correctiva da forma a una tarea, más que proveer de un listado de conclusiones lógicamente derivadas.

c) Así y todo, al darle estructura de sentido al ordenamiento de la responsabilidad civil, la idea de justicia correctiva también contribuye a la *seguridad jurídica*. De hecho, la concepción del derecho civil como un sistema abierto, que tiene un núcleo de sentido, pero que es adaptable a la luz de nuevos casos, que son resueltos en el sentido del ordenamiento, se ha mostrado como un compromiso más equilibrado con el bien de la seguridad que los giros interpretativos, de base puramente conceptualista (como la inferencia de que el Código Civil siempre consideró la reparación del daño moral, porque el artículo 2329 se refiere a ‘todo daño’; o el cambio copernicano del derecho francés luego que después de un siglo la jurisprudencia ‘descubrió’ que el artículo 1384 no establecía una presunción de culpa, sino una responsabilidad estricta por el hecho de las cosas).

<sup>56</sup> Kelsen 1957 132.

<sup>57</sup> Especialmente lúcido en este punto, Stone en Postema 2001 171, con interesantes referencias al límite que tienen las justificaciones en Aristóteles y en Wittgenstein.

<sup>58</sup> Coleman en Postema 2001 184.

**15. La idea de justicia correctiva y los sistemas de responsabilidad.** La idea de justicia correctiva establece un fundamento general para la responsabilidad por negligencia, porque la más elemental de las razones para que alguien sea tenido por responsable de los daños que provoca es su infracción a un deber de cuidado. También orienta la indagación de la regla correcta en materias más concretas de la responsabilidad, como la intensidad del deber de cuidado, la carga de la prueba o la compensación de culpas. A la inversa, también puede ayudar a discernir en qué situaciones la responsabilidad estricta es preferible a la fundada en la negligencia (como, por ejemplo, cuando el riesgo creado por cierta actividad es anormal o excesivo). En circunstancias que la discusión de estas materias supone tener la perspectiva general de la responsabilidad por negligencia, se ha optado por postergar su análisis hasta el capítulo dedicado a la responsabilidad estricta (*infra* § 36).

b. *Concepto instrumental de la responsabilidad patrimonial*

**16. La responsabilidad como instrumento de dirección del comportamiento.** a) La concepción del *derecho privado como instrumento para la consecución de fines* ha penetrado la conciencia jurídica, alterando los caminos tradicionales de la dogmática. En el último tiempo, las intuiciones originarias del utilitarismo y de un pragmatismo básico (Bentham, Von Jhering, Holmes) han sido refinadas y los fines han devenido en más precisos, gracias a los aportes del análisis económico del derecho, que concibe las instituciones jurídicas a la luz de los supuestos prácticos de la economía del bienestar.

Desde un punto de vista instrumental, el derecho de la responsabilidad civil puede ser visto como un conjunto de incentivos (y desincentivos) que permiten orientar el comportamiento hacia fines socialmente deseables por medio de la amenaza de sanciones coactivas. Esta dimensión es consistente con los postulados más fuertes del positivismo jurídico, especialmente de Kelsen, para quien “considerado en cuanto a su fin, el derecho aparece como un método específico que permite inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada”.<sup>59</sup>

Mientras para el positivismo jurídico la naturaleza técnica del derecho está abierta a la consecución de cualesquiera fines, las doctrinas instrumentales que se sustentan en la economía de bienestar dan contenido a esos fines y construyen una propuesta normativa (Kelsen diría ‘política’) para orientar su desarrollo.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Kelsen 1934 72.

<sup>60</sup> No es extraño el tardío descubrimiento que partidarios del análisis económico han hecho de Kelsen (Posner 1995 250), porque la doctrina jurídica positivista concibe al derecho de una manera radicalmente instrumental, pero, a la vez, vacía de contenido. De este modo, se abre el espacio para redefinir la orientación política del derecho, de la mano de la única doctrina instrumental que tiene relevancia práctica en este tiempo (el análisis económico basado en la economía de bienestar). El positivismo jurídico aparece, por un lado,



b) El análisis instrumental del derecho tiene una tradición que se vincula a la filosofía utilitarista (especialmente a partir de Bentham); pero atendido el desarrollo analítico que ha alcanzado la economía, hoy está ampliamente dominado por el *análisis económico del derecho*, que postula que el derecho privado debe ser considerado como una variable de la función general de maximización de la riqueza, que, a su vez, resulta ser la medida del bienestar social.

En un análisis de este tipo, el *concepto de riqueza* que debe ser maximizado se extiende a todos los bienes patrimoniales y no patrimoniales, esto es, tengan o no valor económico. El instrumento para obtener este fin de maximización es el conjunto de reglas coactivas que crean los incentivos para que las personas, en la prosecución coordinada de sus propios intereses provoquen efectos positivos para el bienestar general.<sup>61</sup>

c) El enfoque económico del derecho tiene un aspecto *positivo* (teórico o descriptivo) y uno *normativo* (que propone cómo debe ser el sistema de responsabilidad civil).

La teoría económica pretende ser, ante todo, una disciplina *positiva*.<sup>62</sup> Algunos de los más significativos especialistas en la disciplina del análisis económico del derecho sostienen que el derecho privado ha desarrollado reglas eficientes, que se pueden explicar genealógicamente a la luz de la racionalidad económica. En el fondo, intentan explicar el desarrollo jurisprudencial del derecho (al menos en el *common law*) a la luz de la economía, bajo el supuesto explícito de que los jueces usarían intuitivamente conceptos económicos desde mucho antes de que se formulara una doctrina sistemática en la materia.<sup>63</sup> En este libro se mostrará que esta hipótesis parece correcta en algunos institutos claves de la responsabilidad civil

---

como antídoto contra la tradición que hace inteligible el derecho privado a la luz de la doctrina no instrumental de la justicia correctiva, y, por otro, como una teoría instrumental pero vacía respecto del derecho, que deja espacio para el proyecto político del movimiento de *Law & Economics*. Sobre esta sorpresiva (pero explicable) simbiosis entre el análisis económico del derecho y el positivismo jurídico de Kelsen, *infra* N° 21.

---

<sup>61</sup> Particularmente lúcido es el desarrollo de estos conceptos en Posner 1990, capítulos 12 y 13.

<sup>62</sup> La teoría económica persigue ser una ciencia positiva del comportamiento en la medida que pretende una explicación de la conducta de las personas sobre la base de un modelo básico de decisión racional. El trasfondo de la capacidad predictiva de la teoría está dado por el modelo del sujeto racional, que persigue satisfacer sus intereses en el mayor grado y al menor costo posibles. Pero no es este el sentido en que aquí resulta relevante la pretensión positiva de la teoría económica; se trata de explicar el derecho privado vigente a la luz de directivas que responden a una racionalidad económica.

<sup>63</sup> Esta teoría es desarrollada particularmente en Landes/Posner 1987. A la hipótesis subyace la idea de que seguimos ciertas prácticas que son valiosas (porque aumentan el bienestar), aunque usualmente por malas razones (porque las tenemos por conformes con algún ideal de justicia); particularmente ácido en criticar este trasfondo teórico, Coleman en Postema 2001 189 y, muy especialmente, Coleman 2003 37.

(por ejemplo, en la construcción judicial del modelo de diligencia y en la presunción de culpa en la responsabilidad por el hecho propio).<sup>64</sup>

Pero el enfoque económico ha llegado a ser conocido especialmente como una doctrina *normativa* en un sentido fuerte acerca del derecho privado. El propósito principal de la disciplina sobre el análisis económico del derecho no ha sido explicar o comprender el derecho vigente, sino establecer criterios para cambiarlo. Mientras la dimensión jurídica tradicional del derecho ha sido mirar hacia atrás, hacia la regla que dirigía la conducta del demandado cuando realizó el hecho, el enfoque económico mira hacia adelante, hacia los incentivos que el derecho debe imponer, en la forma de reglas de responsabilidad, para lograr como efecto un comportamiento socialmente óptimo.

d) La diferencia del enfoque económico con el de la justicia se muestra en la manera como se mira la relación entre el autor del daño y la víctima. Para el análisis económico, lo ya ocurrido representa económicamente ‘costos hundidos’, que no son socialmente recuperables; mal que mal, la indemnización de perjuicios es una mera transferencia de riqueza.<sup>65</sup> Su atención esencial está puesta hacia adelante, porque el propósito es influir en que la regla que se formule a nivel legislativo o judicial establezca los incentivos correctos de conducta. En esencia, lo determinante del instrumento (técnico) del derecho radica en la eficacia de la sanción indemnizatoria para la orientación futura del comportamiento, porque impone un costo implícito a todos quienes desarrollen una actividad, lo que influirá en la manera como las personas decidirán en adelante sus cursos de acción.

**17. Nivel óptimo de prevención de daños.** El fin más inmediato del derecho de la responsabilidad civil es la *óptima prevención de accidentes*. La complejidad de la definición de este óptimo de prevención deriva de que la vida humana tiene fines múltiples, ninguno de los cuales puede ser considerado sin relación con los demás. Por eso, desde un punto de vista instrumental, la finalidad de las reglas de la responsabilidad civil no es evitar a toda costa que se produzcan accidentes, sino impedirlos en la medida que los costos que producen esos accidentes excedan los costos asociados a su prevención.<sup>66</sup> Por eso,

<sup>64</sup> La hipótesis parece también verificarse en la norma del artículo 2327 del Código Civil, sobre responsabilidad por el hecho de animales fieros, proveniente del derecho romano.

<sup>65</sup> En ello radica una diferencia esencial con el enfoque de la justicia correctiva (Coleman en Postema 2001 186).

<sup>66</sup> Calabresi 1970 35. Calabresi distingue tres grupos de costos de los accidentes: el más esencial es el *costo primario*, representado por los daños que sufren las víctimas (daños corporales del herido en un choque, incendio de una plantación por las chispas que saltan de una máquina de ferrocarril); si se ha fracasado en prevenir el costo primario, el fin prevalente de la responsabilidad civil será reducir el *costo secundario*, cual es proveer a la compensación de las víctimas (sobre la compensación como fin de la responsabilidad a la luz de la justicia correctiva, *supra* N° 12); finalmente, un sistema racional de responsabilidad civil debe hacerse cargo de la tarea de disminuir los *costos terciarios*, consistentes en los costos administrativos asociados al sistema de responsabilidad (costos de información, profesionales, de transacción para llegar a acuerdos contractuales y otros semejantes). Los costos de prevención son esencialmente los dirigidos a evitar los costos primarios.



no tiene sentido en nuestra sociedad establecer una regla de prevención de accidentes que excluya la posibilidad de que éstos lleguen a ocurrir; ello sería a costa de privaciones de beneficios de la vida cotidiana que no estamos dispuestos a asumir.

En la medida que la interrogante no es por la prevención a secas, sino por el *óptimo de prevención*, se plantea la pregunta por los niveles de riesgo que estamos dispuestos a tolerar, y por las herramientas legales de prevención general y especial más eficientes para alcanzar dichos niveles. Así, si en materia de tránsito el número de accidentes que estamos dispuestos a soportar fuera cercano a cero, entonces el óptimo de prevención exigiría prohibir el uso de los automóviles o restringir la velocidad máxima permitida a 20 km/hora, por ejemplo. Todo indica, sin embargo, que ese nivel de prevención resultaría intolerable para la sociedad actual.<sup>67</sup>

En consecuencia, la tarea preventiva del derecho no es eliminar en absoluto los accidentes, sino obtener un grado razonable de prevención, que atienda no sólo a los costos de los daños que supone una actividad, sino también a los beneficios sociales que a ella se asocian. Las reglas de responsabilidad establecen incentivos de mercado (asociados a sanciones) y de ese modo pueden lograrse niveles tolerables respecto de todos los costos relevantes; en definitiva, las normas de responsabilidad son vistas, desde el punto de vista económico, como regulaciones que deben ser juzgadas por su eficiencia en un balance final de bienestar.

**18. Prevención general y especial de los accidentes.** a) El derecho dispone de dos técnicas diferentes de prevención, que son conocidas como prevención especial y prevención general. La primera pertenece típicamente al derecho administrativo, mientras que respecto de la segunda cumple una función relevante el régimen de responsabilidad civil.<sup>68</sup>

b) Lo característico de la *prevención especial* es que el legislador o la administración actúan mediante la regulación de actividades riesgosas. Estas regulaciones pueden adoptar formas muy diversas: autorizaciones previas para el ejercicio de la actividad en cuestión (como ocurre, por ejemplo, con los proyectos industriales que tienen potenciales efectos adversos en el medio ambiente); revisiones administrativas o por expertos de los estándares de calidad de bienes riesgosos (como ocurre con las revisiones técnicas de los automóviles y con el control de productos farmacéuticos); fijación

<sup>67</sup> Siguiendo esta línea argumental, la Corte Suprema ha considerado que “la conducción de cualquier vehículo motorizado crea un riesgo, el cual, sin embargo, el ordenamiento jurídico permite, en atención a los beneficios sociales que implica el empleo de esos medios de transporte. Tal autorización, sin embargo, reconoce límites impuestos por el cuidado debido e implica la observancia de una serie de regulaciones tendientes a evitar que se excedan dichos márgenes de tolerancia. Cuando esto último ocurre, el hecho ha de considerarse socialmente intolerable” (CS, 12.11.2003, GJ 281, 155, también publicada en F. del M. 516, 3253).

<sup>68</sup> El desarrollo más influyente de los conceptos de prevención y de sus respectivos instrumentos, en Calabresi 1970, capítulos 5 y 6.



de reglas de funcionamiento de la actividad (como ocurre con la velocidad máxima de circulación en calles y caminos o con las reglas sobre ruidos molestos). En el extremo, la prevención especial se logra prohibiendo el ejercicio de una cierta actividad; es lo que racionalmente debiera ocurrir, por ejemplo, respecto de actividades cuyos daños asociados exceden en cualquier hipótesis los beneficios correlativos (como ocurre con el uso de sustancias altamente tóxicas sustituibles por otras más inocuas).

c) Desde un punto vista económico, la responsabilidad civil es entendida como una *técnica de prevención general*, en la medida que sus reglas dan señales de cuidado preventivo que constituyen un mercado autorregulado de incentivos. Bajo el modelo de racionalidad económica que maximiza su utilidad, la responsabilidad civil establece costos asociados al desarrollo de una actividad. En efecto, quien desarrolla una actividad generadora de riesgos conoce las condiciones que determinan su deber de indemnizar a las víctimas de los daños que provoque. De esta manera, se establece implícitamente un desincentivo al descuido (porque se debe asumir el costo de los daños subsecuentes) y un incentivo a los gastos en prevención.

De acuerdo con el supuesto de la racionalidad económica, este incentivo a los gastos en prevención tiene dos variables esenciales. Ante todo, es proporcional al riesgo de pagar indemnizaciones a consecuencia del ejercicio de la respectiva actividad (que, a su vez, es función de la intensidad y probabilidad de que ocurra el daño); por otro lado, depende de los costos en que se debe incurrir para prevenir esos accidentes. Idealmente, el modelo enseña que el gasto en prevención será incrementado hasta el punto en que el costo de una unidad marginal de cuidado iguale el ahorro marginal en indemnizaciones por accidentes (*infra* N° 309, cuadro N° 1).

Bajo estos supuestos, las reglas de responsabilidad civil actúan como directivas de prevención general, pues están dirigidas a todos los creadores de riesgo, estableciendo una regla de atribución de costos de los accidentes asociados a sus actividades. El estatuto de responsabilidad civil no da órdenes, como las regulaciones administrativas, sino que se limita a establecer las reglas del juego, que sirven de trasfondo a las decisiones de innumerables actores. A su vez, el ordenamiento civil actúa como un mecanismo descentralizado de control, porque es la propia víctima quien debe velar por su derecho a ser indemnizada.<sup>69</sup> Así, la tarea del Estado se limita a establecer las reglas de responsabilidad y a proporcionar los medios procesales necesarios para hacerlas valer, creándose, de este modo, un régimen descentralizado de incentivos que propende a un óptimo de bienestar.

d) El sistema de prevención general está con frecuencia en interacción con las normas legales o administrativas de prevención especial. En materia de medio ambiente, por ejemplo, la prevención especial de accidentes está a menudo asociada a la exigencia de que se elabore y apruebe un estudio de impacto ambiental y a que se obtengan autorizaciones administrativas, que la ley establece como condición previa para desarrollar ciertas

<sup>69</sup> Prosser/Keeton *et al.* 1984 7.



actividades industriales riesgosas y, una vez que el proyecto está funcionando, quede sujeto a las regulaciones pertinentes. Si de la infracción a estas regulaciones se sigue daño, la responsabilidad civil actúa como mecanismo de prevención general al imponer un costo indemnizatorio o de restitución del medio ambiente dañado (*infra* § 55).

**19. La responsabilidad estricta y por negligencia desde una perspectiva instrumental. Referencia.** a) A pesar de que el enfoque normativo es común a todas las corrientes del análisis económico del derecho, hay diferencias en la manera como es valorada la responsabilidad por negligencia.

Algunos estiman que es más eficiente un sistema de responsabilidad por culpa.<sup>70</sup> Destacan que la negligencia supone la inobservancia del cuidado debido, esto es, aquel cuidado que podemos exigir de quien desarrolla una actividad; a su vez, ese debido cuidado no puede ser concebido sino en función del nivel óptimo de prevención. Por eso, una regla que atribuye la responsabilidad por hechos culposos sería, por definición, la regla más eficiente socialmente, porque la noción de culpa reconduce al nivel óptimo de cuidado. La culpa, bajo este enfoque, es la variable decisiva para definir precisamente el grado de prevención socialmente deseable. De ello se sigue que la actuación diligente, en observancia del cuidado debido, cumpliría por definición con el nivel de prevención que conduce a un equilibrio óptimo entre el costo de evitar los accidentes (medidas de prevención o costos precautorios) y los riesgos que la actividad supone (costos del daño accidental provocados por la respectiva actividad).

Según otra corriente, que parece dominante, las razones económicas hablan por el establecimiento de estatutos de responsabilidad estricta en áreas más bien amplias de la actividad humana, porque radica la responsabilidad en quien está en mejores condiciones de evitar los daños.<sup>71</sup>

En definitiva, el problema práctico que subyace tras el análisis económico es que más allá de su significativo valor analítico para discernir las reglas óptimas de conducta en función de su utilidad (eficiencia), rara vez se sostiene en evidencia empírica. Así, la discusión continúa aún en un terreno más bien especulativo tiempo después de ser planteada vigorosamente en la década de 1960.

b) Como se ha adelantado, no es este el lugar para la exposición de los argumentos que se suelen dar en favor de la responsabilidad estricta, porque suponen un contrapunto entre ésta y la responsabilidad por culpa. Por eso, la discusión acerca de los méritos relativos de los regímenes de responsabilidad será postergada para el momento en que pueda ser desarrollada sobre una base más informada (*infra* § 36).

<sup>70</sup> Posner 1992 156.

<sup>71</sup> El texto más característico y la justificación más comprensiva de esta posición es Calabresi 1970; el análisis más simple en Shavell 2004 179, 184.

**20. Excurso: Funcionalidad económica de un concepto no instrumental del derecho privado.** a) La disciplina de derecho y economía o análisis económico del derecho es generalmente asociada al concepto pragmático e instrumental del derecho, que se ha reseñado esquemáticamente en los párrafos anteriores. La fuente del análisis económico ha sido la teoría del bienestar, que juzga todas las decisiones públicas desde el punto de vista de las consecuencias que de ellas se siguen para la maximización de la riqueza, entendida como la suma del valor de los bienes económicos y no económicos afectados por la decisión.<sup>72</sup> Y el modelo de comportamiento implícito que subyace al sistema de estímulos jurídicos es el *homo oeconomicus*, que se expresa en el individuo racional y maximizador de su propio bienestar.<sup>73</sup>

Hay, sin embargo, también una dimensión más amplia para juzgar las relaciones entre la economía y el derecho privado. En oposición a la doctrina instrumental, podría hablarse de una doctrina social que concibe al *derecho como la estructura básica que da forma al orden espontáneo del mercado*.<sup>74</sup> Según Hayek, para que el derecho cumpla su función esencial en el desarrollo progresivo de la economía, debe ser concebido como un orden normativo que no persigue fines externos a la relación de derecho privado entre las partes. La idea de justicia correctiva aparece en una nueva dimensión: no sólo es un criterio de justificación interna de la decisión judicial, sino es el criterio funcional que permite al derecho cumplir su tarea de dar un marco normativo a las interacciones al interior de la sociedad civil. Sólo de ese modo el derecho puede cumplir la función insustituible de hacer posible el desarrollo espontáneo de un orden social que aprovecha al máximo las capacidades y el conocimiento dispersos en la sociedad.<sup>75</sup>

La interacción fluida entre el derecho y la ‘gran sociedad’ civil no es compatible con normas que impongan una cierta dirección a la conducta, lo que plantea la prioridad funcional de las reglas que se limitan a estable-

<sup>72</sup> Sobre esta idea de maximización de la riqueza, Posner 1990, capítulos 12 y 13; una breve reseña en Posner en Owen 1995 99; una reseña de las dificultades que plantea el supuesto asumido por el enfoque económico de que el bienestar es un bien analíticamente simple en Coleman 2003 20.

<sup>73</sup> No es el lugar para discutir la crítica que la ciencia empírica del comportamiento económico formula al modelo de racionalidad del *homo oeconomicus* y de su importancia en el derecho privado; al respecto, una referencia más precisa en *infra* N° 67.

<sup>74</sup> El origen de esta doctrina se encuentra en la fructífera interacción de economistas y juristas (especialmente Ludwig von Mises y Franz Böhm) en la llamada escuela austriaca, cuya ruta fue proseguida especialmente por Friedrich von Hayek y Ernst Mestmäcker. Son pensadores europeos que vivieron el desafío del totalitarismo y desconfían del Estado como agente instrumental de dirección social. Rechazando el utilitarismo, que sirve de antecedente a la moderna economía de bienestar, estos autores invocan la tradición de Adam Smith, que enseñaba derecho y economía, y cuyo mayor aporte ven precisamente en haber descubierto la interacción entre la mano oculta del mercado y la muy visible mano ordenadora del derecho (Mestmäcker 1986 59).

<sup>75</sup> Un apasionado desarrollo de estas ideas en Hayek 1973/79 I 1.



cer lo que una persona debe hacer cuando su conducta puede dañar a otros. Son reglas de justicia que no necesariamente han sido formuladas, pero que son discernibles en el contexto de una relación interpersonal<sup>76</sup> y que permiten determinar los límites de lo lícito y definir las consecuencias que se siguen de su infracción. En definitiva, un discernimiento de la lógica del desarrollo espontáneo de la sociedad civil supone evitar un concepto puramente instrumental del derecho, y atender, por el contrario, a criterios de justicia, entendidos como predicados de las acciones humanas y no del orden social en su conjunto.<sup>77</sup>

b) La mejor manera de ilustrar la radical diferencia de enfoques entre la doctrina instrumentalista sobre derecho y economía y la teoría del derecho como estructura básica de los órdenes espontáneos se muestra en la manera como Posner y Hayek, respectivamente, se enfrentan con la teoría del derecho de Kelsen.

Para Hayek, el positivismo jurídico es el camino a la perdición de la tradición del derecho civil, porque lo transforma en un instrumento de políticas públicas impuestas por actos de decisión (*taxis*); se trata de un concepto de derecho que inevitablemente afecta el funcionamiento fluido del orden espontáneo, porque lo interfiere mediante decisiones oportunistas. Las normas que resultan de estas intervenciones son adoptadas en un marco de información necesariamente imperfecto, con el resultado de que no se pueden prever sus efectos indeseables (externalidades negativas). Pero, más allá de esta cuestión epistemológica (referida a los límites del conocimiento), el concepto instrumental de la norma jurídica subvierte el principio jurídico de la libertad, que tradicionalmente ha caracterizado al derecho privado y le permite desarrollar la función ordenadora, pero no impositiva (*nomos*), a que se ha hecho referencia.<sup>78</sup>

En contraste, Posner ha descubierto en Kelsen la teoría del derecho que mejor se aviene al radical instrumentalismo de la escuela de *law and economics*.<sup>79</sup> En la medida que el concepto positivista de derecho es libre de todo contenido y carece de vinculación con una idea de valor, deja abierto el camino para una adjudicación judicial pragmática. De ese modo, se abre espacio para una forma de pensar instrumentalista en el ámbito judicial (que es la preocupación práctica esencial de Posner). El complemen-

<sup>76</sup> Hayek 1973/79 II 33.

<sup>77</sup> En uno de sus textos más penetrantes, Hayek sostiene que el test propio del derecho (privado) es el de la *injusticia*, porque aunque carecemos de criterios positivos para valorar lo justo, sí los tenemos para juzgar lo injusto. La idea de injusticia permite, en su opinión, el desarrollo progresivo del derecho sobre la base de correcciones al derecho hasta ahora vigente, desarrollándose, de este modo, un cuerpo de reglas progresivamente más complejo, que está sujeto a un proceso continuo de revisión crítica. Hayek vincula esta idea a la doctrina kantiana (donde se acepta el test de injusticia como complemento del principio formal del imperativo categórico) y al principio de 'falibilidad' de K. Popper (Hayek 1973/79 II 42).

<sup>78</sup> Hayek 1973/79 II 48.

<sup>79</sup> Posner 1995 250.

to natural de la racionalidad económica en el derecho es una teoría del derecho que abandone toda pretensión de que exista una forma propiamente ‘jurídica’ de pensar. Así, queda entregada al juez la responsabilidad de decidir sobre los problemas legales sin referencia a misteriosas formas de razonamiento legal.<sup>80</sup> Al asumir que esta racionalidad debiera ser instrumental, Posner termina calificando a Kelsen como un ‘positivista pragmático’, cuyo mayor infortunio habría sido vivir antes que el movimiento de *law and economics* descubriera el camino, que antes permanecía cerrado, para completar el vacío que dejaba una teoría pura de lo jurídico.<sup>81</sup>

c) Todo indica que el derecho privado tiene una forma de pensar articulada, que se resiste a ser radicalmente instrumentalizada. Por otro lado, sin embargo, las intervenciones legislativas en áreas específicas de responsabilidad (accidentes del tráfico, medio ambiente, accidentes del trabajo) muestran que el derecho contemporáneo presenta una complejidad mayor que la deseada por el radicalismo filosófico de Hayek.

En la práctica, la actividad jurisdiccional es mediadora entre la universalidad de la ley y el caso particular al cual esa ley deba ser aplicada<sup>82</sup>. Por eso, la disputa de paradigmas que ha sido referida en este párrafo se produce en la práctica de una manera menos dramática. El derecho privado, mal que mal, es un orden de convivencia cuya estructura básica tiene ya más de dos mil años y, como plantea Hayek, ha cumplido su función de ser el sustento de una sociedad que se funda en el respeto recíproco y en la libertad. En gran medida, la función social del derecho privado es la parte sumergida del iceberg, que hace posible el florecimiento superficial de la sociedad civil. Por eso, la pretensión de la escuela de *law and economics* de refundar radicalmente los supuestos del derecho privado, a partir de una racionalidad instrumental, que ignora conscientemente el deber judicial de observancia de la ley y la forma histórica de *pensar* el derecho, tiene mucho de ingenuidad y pesadilla.

Sin embargo, este escepticismo respecto de lo que hace algunos años Tullock llamó el ‘imperialismo económico’,<sup>83</sup> no impide mirar el derecho privado como un orden abierto a la influencia del medio ambiente social y político y sujeto a la prueba de la razón (incluso instrumental, como típicamente se muestra en la legislación). El resultado no será tan puro como quisiera el formalismo, que entiende al derecho privado como un ordenamiento autorreferente, construido sólo a partir de la idea de justicia correctiva; pero se hará cargo de que la conformación del orden más básico de la sociedad (como el que cotidianamente rige las relaciones entre las personas) sea una empresa en la que intervengan consideraciones de dife-

<sup>80</sup> Kelsen 1934 171.

<sup>81</sup> Posner 1995 265, 270.

<sup>82</sup> Atria 2005 141, asumiendo que “esa idea contiene la promesa más admirable del derecho: que podemos gobernarnos a nosotros mismos *en la medida que el legislador deriva su potestad de los ciudadanos* y al mismo tiempo tratarnos como fines, no como medios”.

<sup>83</sup> Tullock 1980.



rente naturaleza.<sup>84</sup> En verdad, la idea de justicia correctiva recorre el derecho de la responsabilidad civil, pero difícilmente puede explicar reglas de responsabilidad cuyo fin sea el logro de ciertos bienes institucionales, como ocurre con la libertad de expresión (*infra* N° 373) u otras metas sociales, como ocurre, por ejemplo, con las reglas legales y administrativas que persiguen la protección ambiental (*infra* N° 578).

*c. Fines distributivos de la responsabilidad patrimonial*

**21. Instrumentos distributivos del riesgo de daño.** a) El concepto de justicia distributiva tiene su origen también en Aristóteles, en uno de los pasajes más oscuros de su *Ética a Nicómaco*.<sup>85</sup> Según Aristóteles, la justicia distributiva se relaciona con la proporción que existe entre el todo y cada una de sus partes. Su perspectiva, por consiguiente, es más general que la justicia correctiva, pues mientras ésta atiende a la relación entre la víctima y autor del daño, la justicia distributiva atiende a la desproporción entre la víctima afectada por el accidente y quienes están en una situación análoga de riesgo y no soportan daño alguno. Esta diferente estructura muestra de qué manera la justicia distributiva es esencialmente un problema de derecho público, cuya función es precisamente la relación entre el todo (la sociedad) y sus partes (las personas).<sup>86</sup>

A la luz de la justicia distributiva, la responsabilidad civil debe corregir la aleatoriedad con que se distribuye la carga de ser víctima de un accidente, poniendo el acento en la forma más equitativa de hacer dicha distribución entre todos los candidatos a sufrir el daño. En tal sentido, esta especie de justicia invoca la solidaridad para con las víctimas de accidentes, corrigiendo la suerte con que se distribuyen los daños. Su fundamento, por consiguiente, es el mérito: bajo consideraciones de justicia distributiva se atiende a la relación de la víctima con un conjunto de personas que no resultan afectadas por daño alguno, a pesar de tener el mismo mérito para haber sufrido el accidente.

En consecuencia, desde la perspectiva de la justicia distributiva, se pretende evitar la desproporción entre los costos asumidos por las víctimas de accidentes (los intoxicados con un alimento defectuoso, por ejemplo) y el conjunto inmensamente mayor de víctimas potenciales (que, comúnmente, somos todos los demás).

<sup>84</sup> Particularmente interesantes, y prometedoras de desarrollos posteriores, me parecen a este respecto las observaciones de Deakin en Birks 1997 294.

<sup>85</sup> Aristóteles *Ética Nicomaquea* 5.3,1131 b.

<sup>86</sup> El derecho público dispone de medios (subsidios, expropiaciones) para que las políticas distributivas o de interés general soporten los estándares constitucionales de la proporcionalidad y de la exigibilidad; aunque el derecho privado cumple una función distributiva muy básica sus instrumentos para la consecución de intereses generales son limitados (Leuschner 2005 245).



b) El régimen de responsabilidad estricta puede cumplir instrumentalmente efectos distributivos. Aunque también concurren razones de justicia correctiva, tiene una función distributiva, por ejemplo, la responsabilidad estricta establecida en la mayoría de los ordenamientos (pero no en Chile) para los daños causados por productos defectuosos, en cuya virtud basta que el daño provenga de un vicio del producto, para que el fabricante resulte responsable. El fabricante debe asumir el costo de los eventuales accidentes que genere su actividad, y al traspasar ese costo al precio de los productos, todos los consumidores (esto es, las potenciales víctimas) pagan por la cobertura del riesgo que amenaza a todos ellos por igual, pero que se materializa aleatoriamente sobre unos pocos. Resulta evidente el efecto distributivo de una regla de responsabilidad estricta (y, en un sentido más débil, de las presunciones de culpa).

c) La mayor *dificultad* con que tropieza la definición de la responsabilidad civil a la luz de la justicia distributiva es que tiende a contradecir lo que exige la justicia correctiva para la relación entre el autor del daño y la víctima. En efecto, a la luz de la justicia correctiva la pregunta es ‘¿por qué el demandado debe correr con costos que no le son atribuibles en su relación con la víctima?’.

En verdad, los modelos más directamente dirigidos a la distribución del costo de ciertos riesgos, son el seguro social y el seguro privado obligatorio. Éstos conducen derechamente a la *socialización del riesgo*, sea por vía pública, como ocurre cada vez que las víctimas son indemnizadas por el Estado con recursos recolectados por medio de impuestos, o por vía privada, mediante el establecimiento de la obligación de contratar un seguro de daños a terceros para desarrollar determinada actividad, como es el caso de la circulación de automóviles.

En el extremo, el sistema de seguros puede ser de tal modo comprensivo de los riesgos, que en la práctica llegue a excluir el sistema de responsabilidad civil. Es lo que ocurrió en Nueva Zelanda, donde en 1975 se instauró un sistema estatal de seguros para los accidentes de tránsito, que se hace cargo de los daños con absoluta prescindencia de la idea de responsabilidad.<sup>87</sup> Los inconvenientes de un sistema de esta naturaleza son los inherentes al alejamiento de los principios normativos del derecho privado que caracterizan al estado de bienestar. Se debilita el sentido de que cada cual debe prevenir los propios riesgos. Es la suave domesticación paternalista que desplaza a la responsabilidad personal, a que se refieren algunos antropólogos,<sup>88</sup> cuyo efecto es la funcionalización del riesgo que aleja del discernimiento de lo correcto y produce efectos preventivos adversos.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Kötz 1991 71; para un análisis crítico, desde el punto de vista de la prevención óptima, del seguro de daños independiente de la culpa en el derecho neozelandés, J. David Cummins, Richard D. Phillips y Mary A. Weiss, “The Incentive Effects of No-Fault Automobile Insurance,” en *Journal of Law and Economics* 2001 427.

<sup>88</sup> Gehlen 1973 76.

<sup>89</sup> Honoré en Owen 1995 93.



En contraste, sin embargo, la racionalidad práctica nos indica que el legislador actuaría con ceguera si no establece correctivos de justicia distributiva donde no se puede dejar a la víctima entregada a su suerte.<sup>90</sup> Ahí está el origen de la práctica universal de establecer sistemas de seguros obligatorios por accidentes del trabajo y de vehículos motorizados (así como para establecer sistemas generales de seguridad social). Por cierto que los sistemas de responsabilidad civil estricta también satisfacen esta finalidad distributiva. Pero existiendo el camino de los seguros, parece preferible que la responsabilidad estricta sólo sea introducida cuando *también* se justifica por razones de justicia correctiva (*infra* Nos 307 y siguientes), reservando el seguro social o el privado obligatorio para los demás casos.

#### § 4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

**22. Desde la venganza privada hacia mecanismos institucionales de sanción y compensación.** a) El régimen dominante de responsabilidad en las primeras culturas parece haber sido la responsabilidad estricta, determinada por el solo resultado dañoso. Sin embargo, ello no se debía a un particular concepto moral o jurídico de responsabilidad, sino a que la mayoría de los daños eran efectivamente atribuibles a la voluntad de dañar. Puede asumirse entonces que el fundamento implícito de la responsabilidad era el ilícito voluntario que dominaba las acciones que producían daño (hurto, lesiones, homicidio).<sup>91</sup> En verdad, “en una época en que la vida era notoriamente brutal y corta, la sola idea de un daño no intencional parece un poco extravagante”.<sup>92</sup>

b) A falta de instituciones políticas y judiciales, la retribución era tarea (y deber) del clan al que pertenecía la víctima. Los primeros atisbos de derecho, aun antes de que existiera propiamente un órgano jurisdiccional establecido, consisten en procedimientos para neutralizar la venganza privada (instancias de apaciguamiento). Así, Evans-Pritchard, en su detallada investigación de las costumbres del pueblo Nuer, mostró que a la siga de un delito, la labor de mediación era asumida por el ‘jefe de la piel de leopardo’, quien carecía de imperio para obligar a la familia de la víctima a renunciar a la violencia, pero que gracias a la autoridad que le era reconocida espontáneamente prestaba amparo al autor del daño, a la espera de que el tiempo calmara las pasiones y que la violencia pudiese ser sustituida por una reparación económica.<sup>93</sup>

Una práctica semejante refiere detalladamente Isak Dinesen en sus *Memorias de África*. Relata el caso de un niño que mató accidentalmente a otro al manipular un arma de fuego, provocando una tensión entre los

<sup>90</sup> Honoré 1999 93.

<sup>91</sup> Kaser 1971 I 135 y 503.

<sup>92</sup> Fleming 1985 2.

<sup>93</sup> Evans-Pritchard 1940 162.

clanes tribales, que es atemperada mediante un largo proceso de negociación, con intervención de autoridades mediadoras informales, que también culmina con una reparación en cabezas de ganado.<sup>94</sup>

c) El principio retributivo es seguido por los primeros códigos conocidos de la antigüedad. El Código de Hammurabi (siglo XVII a.C.) establece nítidamente la ley del talión,<sup>95</sup> sin perjuicio de contemplar también la compensación en dinero por daños no personales.<sup>96</sup> La Ley de las XII Tablas (siglo V a.C.), primera formulación escrita del derecho romano, también establecía la ley del talión,<sup>97</sup> pero dejaba abierta la puerta para que privadamente se pactara una compensación.<sup>98</sup>

d) La evolución del derecho romano de la responsabilidad civil muestra que sus orígenes punitivos siguieron marcándolo en épocas posteriores. Los romanos distinguieron delitos públicos y privados. Los primeros interesaban a la ciudad (sacrilegio, traición) y eran castigados con sanciones propiamente penales. Los segundos estaban entregados a formas institucionalizadas, que tendían a transformar sus efectos corporales en patrimoniales. Por eso, la obligación en dinero que surgía de los delitos no era una reparación, sino una multa penal. Ante todo, era frecuente que los delitos típicos (*furtum*, *damnum iniuria datum*) dieran lugar a penas pecuniarias en beneficio de la víctima, que eran por el duplo o el cuádruplo del daño efectivo.<sup>99</sup> Por otro lado, la obligación que surgía del ilícito se extinguía por la muerte del causante del daño (la sanción penal era intransmisible); y no tenía una función compensatoria, porque se permitía, en caso de concurrencia de responsables, la acumulación de los créditos en contra de cada uno de ellos.<sup>100</sup>

Esta naturaleza penal de la indemnización subsistió incluso hasta el derecho romano tardío. Posteriormente, con la excepción del derecho francés, fue tomada por el derecho europeo de la alta edad media, porque el juez estaba facultado para fijar la indemnización en relación con la gravedad de la acción, con la consecuencia de que podía traducirse en una ganancia patrimonial para la víctima.<sup>101</sup>

e) Sólo con la configuración del estado nacional comienza a consolidarse la separación del derecho penal y el civil que conocemos en nuestra época. La concentración del poder público y la burocracia estatal hicieron posible la persecución pública de los antiguos delitos privados; correlativamente, se desarrolló el concepto de la responsabilidad civil como una obligación de indemnizar los perjuicios efectivamente causados. Este concepto se generali-

<sup>94</sup> Dinesen 1937, capítulo 2.

<sup>95</sup> Por ejemplo, §§ 195-197, 229, 230.

<sup>96</sup> Por ejemplo, §§ 198, 199, 231, 232.

<sup>97</sup> XII Tablas 8.2-6.

<sup>98</sup> XII Tablas 8.2.

<sup>99</sup> Kaser 1971 I 498.

<sup>100</sup> Ídem 612.

<sup>101</sup> Coing 1985 I 504.



zó en las doctrinas modernas del derecho natural y fue recogido por las codificaciones.<sup>102</sup> Con todo, la idea de pena civil sigue latente en el derecho contemporáneo, como se verá al tratar del daño (*infra* N° 198).

**23. Desde el casuismo hacia los principios generales.** a) El derecho romano de la responsabilidad civil introdujo la distinción entre los ilícitos dolosos y los culposos, llegando a constituir la negligencia una categoría autónoma respecto de los ilícitos voluntarios.<sup>103</sup> Sin embargo, la culpa estuvo siempre asociada a *tipos de ilícitos*, que la doctrina fue distinguiendo, especialmente a partir de las hipótesis básicas de la *lex Aquilia*. Esta tipificación estuvo acompañada del desarrollo de un concepto objetivo de culpa (*infra* N° 42),<sup>104</sup> pero la evolución no llevó en el derecho romano clásico a que se formulara un principio abstracto de responsabilidad por negligencia.<sup>105</sup>

b) La evolución hacia una fórmula general de responsabilidad por negligencia estuvo marcada por la inclinación del pensamiento moderno hacia la abstracción y la generalidad. Este camino ya había sido avanzado por los juristas del derecho común, que habían aplicado la *lex Aquilia* romana a todas las hipótesis de daños a las cosas y la *actio iniuriarum* a cualesquiera daños corporales.<sup>106</sup>

El paso definitivo es dado por la escuela racionalista del derecho natural, que introduce a partir de Grocio una cláusula general de responsabilidad por culpa.<sup>107</sup> Sin embargo, la forma que adquiriría la codificación francesa estuvo determinada principalmente por el espíritu universal de Pothier, que asume el esfuerzo de dar forma racional a la tradición romana y a las antiguas costumbres de ancestros germánicos.<sup>108</sup>

<sup>102</sup> Ídem 506.

<sup>103</sup> Inst. Gayo 3.211.

<sup>104</sup> En el derecho romano oriental, bajo influencia de la filosofía griega y de la ética cristiana, hubo un cierto renacimiento de la idea de reprochabilidad moral, no sólo en el dolo, sino también en la negligencia, y se introdujeron nuevas distinciones, cuyo efecto fue privar de su dinamismo a los tipos abiertos descritos por los juristas clásicos (Kaser 1971 II 348).

<sup>105</sup> En las compilaciones bizantinas se construyó la figura genérica de las obligaciones que nacen *quasi ex delicto*. Sin embargo, este concepto de cuasidelito se refiere a los tipos de negligencia a que se ha hecho referencia y a determinadas figuras en que no puede hablarse propiamente de negligencia, pero que son tratadas como tal, como ocurre con la responsabilidad por la caída de un objeto desde la parte superior de un edificio (Inst. Just. 4.5, en relación con 3.13).

<sup>106</sup> Coing 1985 I 506.

<sup>107</sup> La síntesis del método generalizador de la modernidad y de la tradición medioeval tardía se expresa en la fórmula de Grocio sobre las fuentes de las obligaciones: "Hay tres razones para que se nos deba algo: contrato, culpa y ley (...). Nos referiremos ahora a las obligaciones que el derecho natural hace nacer de los actos ilícitos. Ilícitud se denomina aquí culpa y consiste en un acto u omisión que infringe lo que los hombres deben hacer bajo toda circunstancia o según sus calidades especiales. De tal culpa nace en razón del derecho natural la obligatoriedad de reparar los daños provocados" (Grocio *Del Derecho de la Guerra y de la Paz* 6.17).

<sup>108</sup> Pothier 1761 N° 116. Sobre las influencias romanas y germánicas en Pothier, Stein 1996 158.

En materia de responsabilidad civil, estas ideas se tradujeron en una regla general, asumida por los códigos del siglo XIX, cuya expresión más célebre se encuentra en el artículo 1382 del Código francés: “Todo hecho cualquiera del hombre, que causa daño a otro, obliga a quien por cuya culpa ocurrió a repararlo”.

Andrés Bello señala como fuente del artículo 2314 del Código Civil la ley 6, título XV, Partida VII de las Siete Partidas (siglo XIII), un texto romano-canónico representativo del espíritu romanista de la tardía Edad Media.<sup>109</sup> El carácter casuista de este texto, sin embargo, es incompatible con la idea de establecer un principio general. La regla general del artículo 2314 sigue más bien la tradición jurídica moderna, especialmente del Código Civil francés, como ocurre generalmente en materia de obligaciones.

c) La evolución no fue del todo distinta en el *common law*. Si bien hasta ahora conserva cierto casuismo arcaico, siguiendo la vieja tradición romana de los ilícitos específicos (que se denominan *torts*, y que, en general, están regidos por reglas de responsabilidad estricta), ya en el siglo XIX la jurisprudencia estableció una regla general de responsabilidad por negligencia, que pasó a ser el derecho común de la responsabilidad a falta de otro estatuto jurídico específico. De este modo, en el *common law*, en forma análoga a lo ocurrido en la tradición continental, se responde por culpa, entendiéndose por tal la infracción de un deber de cuidado que el autor del daño tenía respecto de la víctima.

Hasta hoy subsiste la discusión acerca de los efectos que tuvo en el sistema de responsabilidad civil la consolidación, en el siglo XIX, de la negligencia como criterio de responsabilidad.<sup>110</sup> Según una opinión dominante, la introducción de esta regla general produjo un efecto expansivo, porque si bien con anterioridad la responsabilidad era generalmente estricta, de acuerdo con los antiguos *torts* específicos, la idea de negligencia cubrió genéricamente todas las posibles hipótesis de daños, rompiendo el esquema casuístico del antiguo derecho.<sup>111</sup> Así, por un camino jurisprudencial, aunque probablemente bajo alguna influencia de la tradición del derecho civil, en el *common law* también se ha llegado a un ordenamiento de la responsabilidad que reposa sustancialmente en la idea genérica de negligencia, sin perjuicio de los estatutos especiales de responsabilidad estricta tradicionales o introducidos por la legislación.

**24. Tendencias de la responsabilidad en el derecho contemporáneo.** Los principios generales de la responsabilidad por culpa, establecidos a partir del *usus modernus* y de la escuela del derecho natural se mantienen hasta nuestros días como criterios básicos para atribuir responsabilidad.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Proyecto de 1853, artículo 2478.

<sup>110</sup> Fleming 1985 19.

<sup>111</sup> Rabin en Rabin 1983 44, Epstein 1982 280.

<sup>112</sup> Zweigert/Kötz 1996 598.



Con todo, la extrema generalidad del principio de responsabilidad por culpa, que fue el resultado de un proceso de concentración conceptual desde los ilícitos específicos del derecho antiguo, ha tendido a plantear un proceso inverso de diferenciación, que ha devenido en un sistema de responsabilidad civil crecientemente más complejo (como se verá a lo largo de este libro).

Aunque el principio de la culpa se ha mostrado como un criterio de atribución de responsabilidad general y adaptable, la evolución del sistema de responsabilidad civil en su conjunto ha estado determinada en el último siglo por algunas tendencias que han cruzado transversalmente (aunque con intensidades diferentes) todos los sistemas jurídicos. Ellas responden a cambios en los valores (especialmente a la creciente expectativa de seguridad que se asocia al aumento de la riqueza), a la evolución objetiva de los riesgos y al desarrollo paralelo de técnicas que permiten controlarlos. Algunas de estas tendencias se anticipan sumariamente a continuación.

**a) Responsabilidad civil y seguro.** Un cambio sustancial se muestra, ante todo, en las relaciones de la responsabilidad civil con otros sistemas de reparación de daños. Existe una creciente *superposición de la responsabilidad civil con sistemas de seguros de accidentes*, públicos y privados. Tradicionalmente, el seguro de responsabilidad civil protegía sólo al asegurado, que evitaba así el riesgo de pagar indemnizaciones. Pero la legislación ha creado seguros obligatorios contra daños propios (salud, por ejemplo) o contra daños de terceros (típicamente de accidentes del trabajo y de tránsito).<sup>113</sup> Estos seguros tienen fines distributivos y garantizan a la víctima una compensación por los daños sufridos. Desde un punto de vista funcional, el seguro obligatorio de daños propios (que cubre los daños que sufre el asegurado) o de daños a terceros (donde cada cual asegura los daños que por cualquier causa pueda provocar a otros) distribuye los costos de los daños entre todos los candidatos a víctimas, porque cada cual paga una prima que aleatoriamente beneficiará a quienes llegarán a ser víctimas de daños. A su vez, el fin último del seguro obligatorio es garantizar la compensación de la víctima, al proveerle de reparación, cualquiera sea la causa del accidente. El establecimiento de seguros obligatorios recae especialmente en actividades que aleatoriamente amenazan a muchas personas (accidentes del tránsito, por ejemplo) o cuyas víctimas son objeto de especial protección (accidentes del trabajo, típicamente).

En circunstancias que los seguros de daños a terceros concurren parcialmente con las normas de responsabilidad (porque un mismo daño puede ser objeto de responsabilidad civil y estar cubierto por un seguro), se plantean problemas técnicos de concurrencia de acciones provenientes del contrato de seguro y de la responsabilidad civil (*infra* § 58 h). En principio, ello no debiera plantear dificultades, porque se trata de distintas causas de pedir; sin embargo, ha sido frecuente que se desarrollen presio-

<sup>113</sup> Sobre la delimitación conceptual de seguros de daños y de responsabilidad *infra* N° 856.



nes para que el sistema de responsabilidad civil observe los mismos principios del seguro y pase progresivamente a ser considerado como garantía de la compensación.

Esta última tendencia es resistida en este libro, porque provoca que la responsabilidad civil se disuelva en los sistemas de seguro obligatorio y de seguridad social, cualquiera sea su estructura. De la circunstancia que la responsabilidad civil tenga un lugar secundario como instrumento de compensación (por la generalización de los seguros obligatorios de daños y de la seguridad social), no se sigue que su justificación sea la misma del seguro. Mal que mal, el seguro es establecido precisamente porque la responsabilidad civil no puede actuar como garantía general de compensación de daños (*supra* N° 5 y especialmente *infra* N° 859).

**b) Posición estratégica de las partes en materia probatoria.** Una segunda tendencia es interna al sistema de responsabilidad por culpa, en cuanto atiende a la posición estratégica de las partes en el juicio de responsabilidad. El requisito de la culpa y la causalidad imponen a la víctima el deber de probar que el daño sufrido se debe al hecho culpable del demandado. En casos típicos, como los accidentes del tránsito, esta prueba es sencilla, pues basta probar la infracción a la regla del tránsito que ocasiona un daño. En otras ocasiones, sin embargo, la prueba de la culpa o de la causalidad puede ser en extremo dificultosa para la víctima, atendida la situación de desequilibrio estratégico en que se encuentra respecto del demandado (que controla la información). Es el caso, por ejemplo, de los productos defectuosos que causan un daño: el consumidor usualmente no está en condiciones de probar la negligencia que provocó en concreto el defecto, de modo que bajo el principio general sobre carga de la prueba, lo más probable es que quede en la indefensión.

El más eficiente correctivo en estos casos son las *presunciones de responsabilidad*, que invierten la posición estratégica que las partes tienen en el juicio de responsabilidad. Las presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno (de dependientes) y por el hecho propio (de quien genera un daño en ejercicio de una actividad peligrosa, por ejemplo) se pueden justificar por razones de justicia, porque se hacen cargo de la posición efectiva de las partes para proveer de prueba, y de eficacia preventiva, porque impiden que crezca la cifra negra de accidentes culpables, pero que no generan costos indemnizatorios para quien negligentemente los provoca.<sup>114</sup>

**c) Culpa anónima o en la organización.** Desde el derecho romano, *el concepto civil de culpa tiene un carácter objetivo*, esto es, supone comparar la conducta efectiva con un estándar general de conducta. Esta característica favorece la expansión de la responsabilidad, porque simplifica la prueba y establece estándares generales y adaptables a las expectativas recíprocas de comportamiento. Aun así, suele ser muy difícil, especialmente en procesos productivos complejos, identificar la acción culpable concreta que da lugar al accidente. En estos casos, la única manera razonable de construir el

<sup>114</sup> *Infra* §§ 14, 17 y 18.



juicio de culpabilidad es haciendo referencia al estándar de conducta que en tales condiciones podía esperarse del demandado organizado como empresa (*infra* N° 129). Así se puede prescindir de la acción humana individual y radicar el ilícito en la empresa, entendida como organización (*infra* § 18). El mismo principio inspira la responsabilidad de la Administración del Estado por falta de servicio (*infra* § 40).

**d) Expansión del daño reparable.** El concepto general de negligencia, en la medida que escapa a la tipificación de ilícitos del derecho romano, abrió también la puerta para que pudieran ser indemnizados cualesquiera daños que sufra la víctima. Así y todo, la codificación civil fue muy escéptica respecto de la reparación de los llamados *daños morales*, porque el ámbito del derecho de obligaciones estaba exclusivamente radicado en las relaciones patrimoniales. De hecho, la única norma del Código Civil que les hace referencia es para negarles efectos indemnizatorios (artículo 2331). Uno de los desarrollos jurisprudenciales más impresionantes del derecho contemporáneo de la responsabilidad civil radica precisamente en la aceptación de la reparación del daño moral. En ello ha influido la creciente importancia de los derechos de la personalidad y el asentamiento del principio de la reparación de todo daño. Con todo, los juristas más conscientes siempre han tenido presente que esta expansión debe estar acompañada de la definición de sus límites, atendida la extensión inabordable de los intereses no patrimoniales que pueden verse afectados por la acción de terceros y las graves dificultades de evaluación en dinero de bienes e intereses que por definición no son objeto de intercambios.

A diferencia de lo ocurrido en otras materias del derecho de la responsabilidad civil, la irrupción *extra legem* de la responsabilidad por daño moral no ha estado sujeta a directivas prácticas probadas por la experiencia. De ahí también la urgencia de que la evolución esté sujeta a mayor control jurisdiccional y a un discernimiento doctrinal crítico (*infra* N° 201). En verdad, hay pocas materias en el derecho de la responsabilidad civil que generan mayores diferencias en el derecho comparado contemporáneo que la definición de los daños no patrimoniales indemnizables y la extensión que debe adoptar su compensación (*infra* § 25).

**e) Estatutos de responsabilidad estricta u objetiva.** Finalmente, respecto de ciertos riesgos el estatuto general y residual de responsabilidad por culpa es reemplazado por uno de *responsabilidad estricta*, por razones de justicia correctiva o de políticas públicas. Como se ha adelantado, la reseña de las justificaciones para la introducción de regímenes de responsabilidad estricta quedará en suspenso para una etapa posterior de este libro (*infra* §§ 36 y 37). Entretanto, queda por reiterar que buena parte de la abundante literatura sobre los fundamentos filosóficos y económicos de la responsabilidad civil reside precisamente en la pregunta por las razones y circunstancias que justifican la introducción de este tipo de responsabilidad.

## § 5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR CULPA O NEGLIGENCIA EN EL DERECHO CHILENO

**25. Principio de responsabilidad por el propio injusto como régimen general y supletorio.** a) El derecho de la responsabilidad civil debe resolver en concreto el punto en que el ejercicio de la libertad de unos entra en colisión con los intereses de otros, en términos que nace para éstos el derecho a ser reparados en los daños que han soportado. De acuerdo con el principio de que cada cual soporta sus daños, a menos que haya una razón para atribuir a un tercero la obligación de repararlos (*casum sentit dominum*), la pregunta esencial que plantea la responsabilidad civil se refiere precisamente a las razones que justifican darla por establecida. En otras palabras, sólo habrá responsabilidad en la medida que se cumplan los requisitos que el propio derecho establece. Como ya ha sido discutido, esta es una pregunta común a todos los sistemas de responsabilidad civil, en la medida que no resulta imaginable un ordenamiento que imponga responsabilidad por todos y cada uno de los daños que nos ocasionamos recíprocamente con ocasión del tráfico espontáneo en que participamos.

b) La razón más general para la atribución de responsabilidad en nuestro sistema jurídico es que el daño se deba a la *culpa o negligencia* del demandado (o de una persona por quien éste responda). La idea de culpa aparece en todas las normas que establecen el sistema general de responsabilidad en el derecho chileno (1437, 2284, 2314 y 2329). Este régimen de responsabilidad exige como condición para que el daño sea atribuido a un tercero que sea el resultado de una acción ejecutada con dolo o con la mera infracción a un deber de cuidado.<sup>115</sup> De este modo, como se ha visto, el principio de la responsabilidad por culpa cumple, a la vez, la función de ser el fundamento y el límite de la responsabilidad: por regla general, el dolo y la negligencia dan lugar a responsabilidad civil y, en contraste, sólo se responde si se ha incurrido en dolo o negligencia.<sup>116</sup>

c) Atendida su generalidad, la responsabilidad por culpa o negligencia es el régimen común y supletorio de responsabilidad en el derecho chileno, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa.

**26. Elementos del juicio de responsabilidad por culpa o negligencia.** a) Los requisitos de la responsabilidad civil por culpa o negligencia pueden ser ordenados en cuatro grupos: *i*) una acción libre de un sujeto capaz, *ii*) realizada con dolo o negligencia, *iii*) que el demandante haya sufrido un daño y *iv*) que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal

<sup>115</sup> Así, se ha fallado que “no puede afirmarse que todo accidente que infiera daños importe de suyo falta o culpa imputable a persona determinada, porque es menester, para que exista un cuasidelito, que el perjuicio producido provenga de un hecho ilícito o bien de la omisión de actos de cuidados o diligencia requeridos por la ley” (CS, 21.9.1923, RDJ, t. XXII, sec. 1<sup>a</sup>, 481).

<sup>116</sup> Larenz/Canaris 1994 352.



suficiente para que éste pueda ser objetivamente atribuido al hecho culpable del demandado. La doctrina y la jurisprudencia nacionales comparten esta enumeración de requisitos.<sup>117</sup>

b) A pesar de que la culpa civil no implica un juicio subjetivo de reproche al autor del daño, el derecho exige que la acción por la cual el sujeto responde le sea atribuible como su *acción libre*. Este requisito elemental de atribución subjetiva se descompone en los requisitos de que el sujeto responsable sea *capaz* y haya actuado de una manera que resulte imputable a su *voluntad*. Ambos aspectos del requisito subjetivo de la acción serán analizados en el *Capítulo II*.

c) La *culpa* articula el régimen general de responsabilidad, porque establece el criterio para atribuir la obligación reparatoria. La culpa civil comprende genéricamente las hipótesis de culpa intencional (*dolo*) y de culpa no intencional (*negligencia*). En circunstancias que el requisito menos exigente es la negligencia, éste es también el umbral de la responsabilidad civil. La negligencia civil es esencialmente la falta del cuidado debido de acuerdo con un estándar de comportamiento. La definición de ese estándar, así como las diversas hipótesis y problemas de aplicación, serán analizadas en el *Capítulo III*.

d) El elemento más genérico en la responsabilidad civil es el *daño*, porque es común a toda forma de responsabilidad civil, sea por culpa o estricta. A diferencia de lo que ocurre en materia penal, no hay responsabilidad patrimonial si la víctima no ha sufrido daño alguno. Por eso, el concepto de daño es determinante para definir la extensión material de la responsabilidad civil. El daño como elemento de la responsabilidad civil por culpa y estricta será analizado en el *Capítulo IV*.

e) La responsabilidad civil supone que el daño sufrido por el demandante sea objetivamente atribuible al hecho del demandado. Este requisito se expresa en la idea de *causalidad*, pero comprende, en verdad, dos elementos diferentes: por un lado, el hecho del demandado debe ser *condición necesaria* de la ocurrencia del daño, pues a falta de esta conexión no es posible atribución alguna de responsabilidad; por otro lado, entre el hecho del demandado y el daño debe existir una relación de suficiente proximidad, que en nuestra tradición civil se expresa en el requisito de que el daño debe ser *directo*. Ambos aspectos de la atribución objetiva del daño al hecho del demandado serán tratados en el *Capítulo V*, sobre causalidad.

<sup>117</sup> Así lo entiende la doctrina nacional (Alessandri 1943 123, Ducci 1936 19, O. Tapia 1941 130, Corral 2003 105); y también la jurisprudencia dominante; a modo de ejemplo, véanse las siguientes sentencias: CS, 19.4.2000, RDJ, t. XCVII, sec. 5ª, 83, publicada también en F. del M. 497, 452; Corte de Santiago, 6.12.2000, RDJ, t. XCVII, sec. 2ª, 117; CS, 8.10.2001, GJ 256, 232, publicada también en F. del M. 503, 3385; CS, 4.9.2002, RDJ, t. XCIX, sec. 1ª, 186; CS, 13.11.2002, GJ 269, 39, publicada también en F. del M. 504, 3702; Corte de Santiago, 8.9.2004, GJ 291, 238; y Corte de Copiapó, 15.12.2004, rol N° 543-2004. P. Rodríguez 1999 119 agrega el requisito de antijuridicidad; que fue introducido por el BGB alemán y ha sido recogido por la doctrina italiana y argentina; la funcionalidad de este requisito es discutida incluso en los sistemas jurídicos donde forma parte de la regulación legal (Kötz 1991 41), de modo que no resulta necesario ni conveniente introducirlo en el análisis del derecho chileno (*infra* N° 51).